

HILDEBRANDT

en sus trece

FOTO CÉSAR ZAMALLOA



Plan del hampa: seguir blindando a Boluarte y botar al Fiscal de la Nación

► Juan Carlos Villena será acusado en el Congreso por supuesta infracción constitucional al haber denunciado a quien afirma que preside el Perú

(2, 3 y 30)

Plan del hampa: seguir blindando a Boluarte y botar al Fiscal de la Nación

► Juan Carlos Villena será acusado en el Congreso por supuesta infracción constitucional al haber denunciado a quien afirma que preside el Perú

AMÉRICO ZAMBRANO

El gobierno, en complicidad con sus aliados políticos del Congreso, prepara un contraataque contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en venganza por haber formulado una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo conocido como "Rolexgate".

El objetivo de este plan es que los grupos políticos que controlan el Parlamento inicien un juicio político contra el titular del Ministerio Público con el objetivo de destituirlo del cargo por supuesta infracción a la Constitución. De esta manera, se paralizarían las investigaciones preliminares de la Fiscalía y Dina Boluarte quedaría blindada una vez más.

Los tambores de guerra se escucharon ni bien Villena presentó la denuncia constitucional contra la mandataria el lunes último. Al día siguiente, en una rueda de prensa desde los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Eduardo Arana, acusó al Fiscal de la Nación de infracción constitucional al haber denunciado a la presidenta por delitos que no están incluidos en el artículo 117 de la Carta Magna.

"Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley debidamente prevarica y cuando un alto funcionario como (en) este caso el Fiscal de la Nación inaplica la Constitu-

ción, lo que está haciendo es también injuriar los parámetros y principios de la Constitución y, en este caso, está incurriendo en una infracción constitucional", señaló Arana. "Este hecho, que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial, debe ser valorado en su oportunidad", añadió.

El premier Gustavo Adrianzén tampoco se quedó callado y, al igual que Arana, arremetió contra Villena. "La presidenta está siendo víctima de una per-

secución que tiene como base la Fiscalía", señaló Adrianzén en una conferencia de prensa. Y añadió: "Es intolerable que, (...) habiéndose indicado los únicos cuatro supuestos en los que puede ser acusada la presidenta, en un exceso se mella la potestad de la señora presidenta, afectando el ejercicio de sus funciones. Debíó archivar (la investigación)".

Los ataques del gobierno contra el Fiscal de la Nación tuvieron un eco inmediato en el Congreso de la República. Di-

versos parlamentarios cuestionaron a Villena por presentar una denuncia constitucional contra la mandataria y lo acusaron de "debilitar la política del país".

La contraofensiva, como se ve, estaba cantada. El miércoles último el Fiscal de la Nación fue finalmente denunciado constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La demanda fue interpuesta por el abogado Jhon Carlos López Goicochea. Entre abril y junio

del año 2022 López se desempeñó en el cargo de confianza de Jefe Zonal II de la Jefatura Zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones de la ciudad de Trujillo, en La Libertad, que tiene como gobernador regional a César Acuña Peralta, mandamás de Alianza para el Progreso (APP) y socio político de la presidenta Dina Boluarte.

El documento dirigido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, militante de APP, recoge los mismos argumentos



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Lady Camones, militante del partido de César Acuña, el socio político de la investigada Dina Boluarte, es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que definirá el destino de las denuncias presentadas tanto contra la presidenta Dina Boluarte como contra el fiscal Juan Carlos Villena.



FOTO JOEL DURÁN

Con una tercera denuncia constitucional en marcha, Dina Boluarte será la presidenta con más acusaciones penales de los últimos años, incluso más que el dictador Alberto Fujimori.

Expediente:

Escrito N° 1

SUMILLA: DENUNCIA CONSTITUCIONAL POR INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y VULNERACIÓN DOLOSA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL CONTRA EL FISCAL DE LA NACIÓN JUAN CARLOS VILLENA CAMPANA.

SEÑOR.

ALEJANDRO SOTO REYES.

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

ATENCIÓN:

SEÑORITA:

LADY CAMONES SORIANO.

PRESIDENTA DE LA SUB COMISION DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

JHON CARLOS LOPEZ GOICOCHEA, debidamente identificado con DNI. 40937616, con domicilio en Calle Manuel Castañeda N° 335 - distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, con correo electrónico: jhcarlos168106@gmail.com; ante usted con el debido respeto me presento y expongo:

I.- PETITORIO

Que, al amparo de los artículos 99°, 100° Y 117° de la Constitución Política del Perú, y del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República; interpongo **DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA JUAN CARLOS VILLENA CAMPANA**, en su condición de Fiscal de la Nación, **POR HABER INCURRIDO EN LA INFRACCIÓN AL PRECEPTO CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, ASI COMO POR LA**

2.- Que, dicha denuncia fue presentada ante el área de trámite documentario del Congreso de la República el 27 de mayo de 2024, signándose como ACUSACIÓN N°492-2021-2026, la misma que fue derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales de acuerdo a lo establecido en el apartado b) del artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República para su calificación.

3.- Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N°052- LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, establece categóricamente que el Ministerio Público tiene como **FUNCIÓN PRINCIPAL LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD**, y tal como lo señala el artículo 64° del mismo cuerpo normativo, es el Fiscal de la Nación el que representa al Ministerio Público, quien por imperativo taxativo debe cautelar la defensa irrestricta de la legalidad de cada una de las acciones de esta institución autónoma reconocida y sujeta a la Constitución Política del Perú.

El Fiscal de la Nación quien personifica al Ministerio Público, debe defender la legalidad como garantía de un estado de derecho y en base a ello debe ser escrupuloso defensor de los preceptos que se encuentran establecidos taxativamente en nuestra carta magna.

4.- Que, el artículo 117° de la Constitución Política del Perú establece categóricamente que:

"Artículo 117°.- El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".

PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA MODALIDAD DE PREVARICATO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 418° DEL CÓDIGO PENAL.

La presente denuncia se plantea con plena observancia de los requisitos de su admisibilidad y lo establecido en el Reglamento del Congreso:

- En mi condición de ciudadano, defensor de nuestra carta magna y de las normas sustantivas penales, amparado en el apartado a) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, la misma que señala que **cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional** contra los altos funcionarios del Estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99° de la Constitución Política.
- La denuncia constitucional interpuesta debe ser tramitada de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 89°, c) del Reglamento del Congreso.

III.- FUNDAMENTOS FÁCTICOS

1.- Que, mediante Disposición de Fiscalía de la Nación de fecha 24 de mayo de 2024 de la carpeta fiscal N°68-2024, el denunciado JUAN CARLOS VILLENA CAMPANA, en su condición de Fiscal de la Nación, actuando de manera dolosa y contravención a lo establecido en el artículo 117° de la Constitución Política del Perú y del artículo 418° del Código Penal formula denuncia constitucional contra la Presidenta de la República, Dina Ercila Boluarte Zegarra en su actuación como presidenta de la República como autora de la comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de cohecho pasivo impropio previsto y sancionado en el artículo 394°, primer párrafo del Código Penal.

Imperativamente se señala que el Presidente de la República solo puede ser acusado por cuatro motivos:

- Traición a la patria.
- Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.
- Disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución.
- Impedir su reunión o funcionamiento, del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Como bien se puede establecer, estamos ante un numerus clausus de motivos por los cuales se puede acusar a la Presidenta de la República en ejercicio de su función. Acusar constitucionalmente por motivo distinto a los expresos en el artículo 117° es contravenir dolosamente a la Constitución.

5.- Que, el Fiscal de la Nación en plena inobservancia dolosa de la función principal de defensor de la legalidad de los preceptos constitucionales, formula denuncia constitucional a la Presidenta de la República por un delito común, contraviniendo en el espíritu del precepto constitucional señalado líneas arriba. Hecho que constituye un actuar doloso de parte del representante máximo del Ministerio Público en evidente y manifiesta infracción constitucional.

6.- Que, asimismo el actuar del Fiscal de la Nación no solo contraviene la carta magna, sino que también vulnera dolosamente el precepto establecido en el artículo 418° de la norma sustantiva penal, ya que con la emisión de la **DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN, SIGNADA CON NÚMERO DE CARPETA FISCAL 68-2024, HA INCURRIDO EN EL DELITO DE PREVARICATO**, el mismo que establece categóricamente:

gaciones que comprometen a la mandataria mientras que el Congreso destituiría al Fiscal de la Nación.

La denuncia constitucional contra Villena será analizada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Lady Camones, quien es uno de los alfiles del dueño de su partido César Acuña.

El miércoles último este grupo de trabajo declaró impropio una denuncia constitucional por el presunto delito de lesa humanidad contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz de las muertes de civiles ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

La acusación, que había sido interpuesta por el economista Ciro Silva, fue rechazada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El grupo de trabajo liderado por Lady Camones tiene pendiente de resolver otras dos denuncias constitucionales contra la mandataria. La primera de ellas fue presentada por la destituida Fiscal de la Nación Patricia Benavides en noviembre de 2023, luego de que fuera acusada de encabezar una presunta organización criminal enquistada en la cúpula del Ministerio Público, desde donde ejerció un tráfico de influencias y un intercambio de favores políticos con el Congreso.

En esta denuncia Benavides le imputó a Boluarte el presunto delito de homicidio y la responsabilizó por las muertes que dejó la represión de las protestas que inauguraron su mandato el 7 de diciembre de 2022.

La segunda denuncia constitucional que verá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es la que acaba de interponer esta semana el Fiscal de la Nación contra la presidenta por el caso de los relojes Rolex y las joyas de lujo entregados por Wilfredo Oscurima a cambio de partidas presupuestales.

Fuentes del Congreso señalaron que "es casi seguro" que ambas denuncias constitucionales serán archivadas por el grupo que preside Camones. En cambio, esta subcomisión sí parece estar dispuesta a aceptar

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Cuatro páginas de la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación que el abogado Jhon Carlos López Goicochea presentó ante el Congreso. Todo estaba armado.

esgrimidos por los ministros que han salido a defender a Dina Boluarte. Y señala que Villena habría cometido una infracción del artículo 117 de la Constitución, el cual establece que el presidente de la república no puede ser acusado por delitos comunes mientras

ejerce el cargo.

"El actuar del Fiscal de la Nación no sólo contraviene la carta magna sino que también vulnera dolosamente el precepto establecido en el artículo 418 de la norma sustantiva penal, ya que con la emisión de la disposición de la Fiscalía de la

Nación ha incurrido en el delito de prevaricato", se lee en el documento presentado por López Goicochea.

La denuncia constitucional contra Villena va en la misma línea de la demanda competencial presentada por el gobierno ante el Tribunal Constitucional

(TC). Esta demanda busca que el TC fujimorista determine, interfiriendo en disposiciones fiscales y decisiones judiciales, que la presidenta no puede ser investigada hasta el término de su mandato. De esta manera, se matarían dos pájaros de un solo tiro: el TC anularía las investi-

Leyes de gravedad

► El Congreso inflama la brecha fiscal con sus proyectos populistas y amenaza con seguir haciendo uso de su capacidad de gasto otorgada por un TC que le debe la vida

ELOY MARCHÁN

Del matrimonio legislativo de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón ha salido un forado de S/ 99,000 millones del presupuesto nacional. Las estimaciones son del BCR, el Consejo Fiscal, la SUNAT, Apoyo Comunicación y el MEF. El desfaldo equivale al 40% del presupuesto nacional de este 2024. Los padrinos que regalaron la pata de cabra fueron los magistrados del Tribunal Constitucional ungidos por el fujimorismo.

La farra fiscal del Congreso tiene molesto al presidente del BCR, Julio Velarde. La semana pasada, en un gesto sin precedentes, le jaló las orejas al ministro de Economía, José Arista. "Si el MEF dice que incrementan el gasto, lo censuran", dijo. Según fuentes cercanas al mandamás del Banco Central del Reserva, desde marzo le viene "recomendando" a Arista que debe ponerle freno al Congreso. El ministro no responde.

Hasta septiembre del 2022 el Congreso estaba impedido de aprobar leyes que generaran gasto público. Así lo estipulaba el artículo 79 de la Constitución de Alberto Fujimori. La medida fue una respuesta al descalabro económico del primer gobierno de Alan García. La heredera del chino dinamitó el candado con ayuda del TC nombrado por

ella y sus secuaces.

En un fallo del 27 de septiembre del 2022 los magistrados reinterpretaron el artículo 79 de la Constitución y restituyeron al Congreso la facultad de dar leyes que impliquen gasto público. Solo pusieron una condición: que el gasto no se aplique al año en curso. Es decir, pueden empeñar al país impunemente siempre y cuando sea a futuro inmediato.

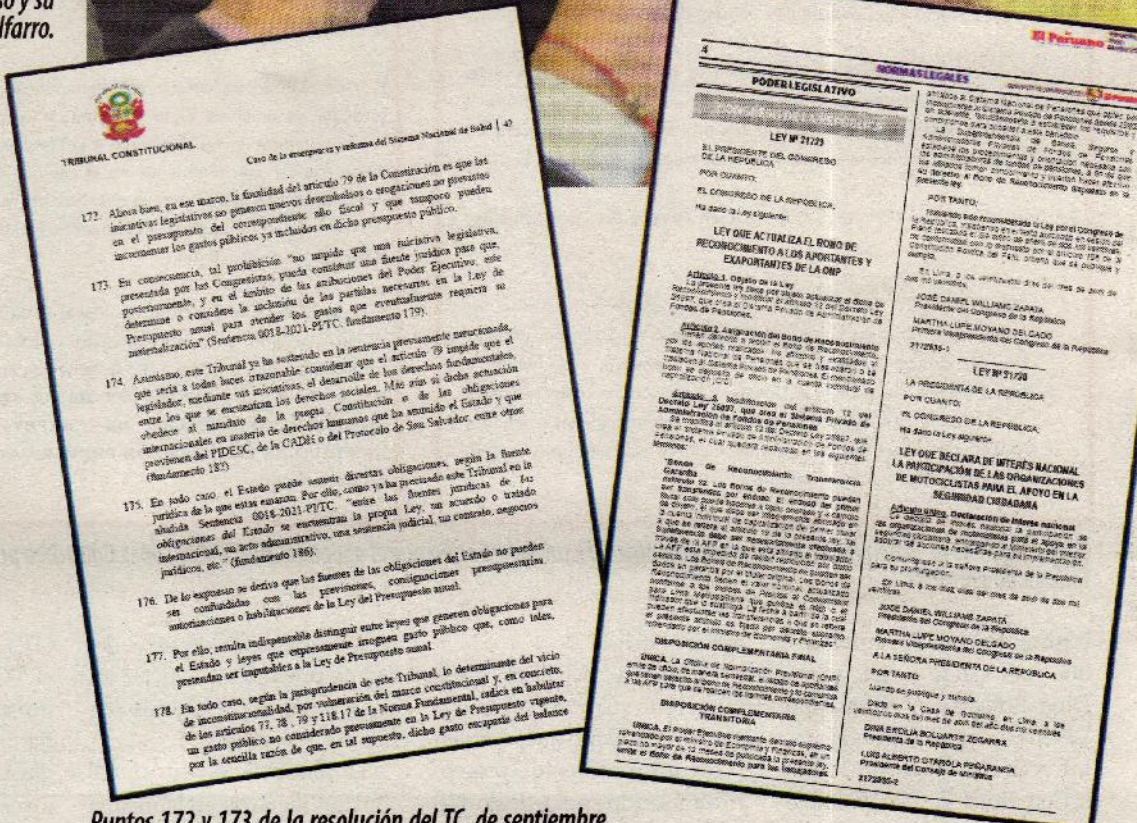
Tres días después de esta "interpretación auténtica", el Congreso dio el pistoletazo de salida. El 29 de septiembre del 2022 el pleno aprobó la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba, en Piura. Desde entonces van 20 "universidades" engendradas por el Congreso de los mochasuelos, con el silencio cómplice del MEF.

Dina Boluarte, al igual que el analfabetismo funcional, parece encantada con la multiplicación de universidades. El último miércoles firmó la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo, Puno. Y con esta van trece veces que la presidenta estampa una firma y crea un "centro de estudios superiores".

Según estimaciones del portal Transparencia del MEF, una universidad de tres pabellones y cinco carreras requiere un presupuesto no menor de S/ 100 millones en infraestructura y equipos. Eso sin contar el presupuesto anual para mantenerla en funcionamiento.

Julio Velarde: desde marzo viene pidiendo al MEF que detenga al Congreso y su despilfarro.

FOTO JOEL DURÁN



Puntos 172 y 173 de la resolución del TC, de septiembre del 2022, por el caso del nombramiento del personal de salud, que abrieron la puerta para que el Congreso tenga iniciativa de gasto.

Ley que reconoce bono a los aportantes y exaportantes de la ONP. La norma, dada en abril del 2023, significa S/ 40,800 millones al fisco.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

José Arista: no quiere pelearse con el Congreso y ha optado por ser cómplice de la farra fiscal. Cada vez existe menos.

FOTO JOEL DURÁN



Alonso Segura: "La situación que está provocando el Congreso es muy preocupante. Se está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país".

Al actual Congreso también se le ha dado por el hormigón y el asfalto. Por ley ordena hacer carreteras y puentes. Hay 31 leyes publicadas en "El Peruano" que obligan al Ejecutivo a ejecutar obras de infraestructura. ¿Cómo lo hacen? Declaran de "necesidad pública e interés nacional" la obra y el Ejecutivo tiene la obligación de desembolsar el presupuesto.

La obra más onerosa ha sido la carretera Sicuani (Cusco) - Macusani (Puno), una propuesta de Flavio Cruz, de Perú Libre, cuyo estimado de inversión es de S/ 268 millones.

La ley que más gasto ge-

neró al Estado, según el Consejo Fiscal y el BCR, ha sido la bonificación extraordinaria mensual a los docentes por preparación de clases. El presupuesto que requiere cumplir con esta ley suma S/ 42,000 millones. Son más de 400 mil profesores, entre activos y cesantes, los que se beneficiarán con el bono a lo largo de una década. Boluarte ya ha desembolsado S/ 1,200 millones.

La segunda ley que más daño le hará al fisco es la que ordena la entrega de un bono de reconocimiento a los aportantes y exaportantes de la ONP que quieran migrar al Sistema Privado de Pensiones. La norma,

aprobada en abril del 2023, significará un desembolso de S/ 40,800 millones. El fujimorismo impulsó el proyecto, en este caso a través de Rosangella Barbarán.

Fueron 83 votos a favor los que respaldaron la ley. A diferencia del bono para los docentes, la gestión Boluarte sí observó la norma, pero el Congreso se zurró en la presidencia y la aprobó por insistencia.

En junio del 2023 el Congreso dio una norma para poner en marcha el pago a los fonavistas que venía siendo dilatado por el MEF. Según los estimados del Consejo Fiscal, esta norma equivale a S/ 6,600 millones. El último 25 de abril

los fonavistas comenzaron a pasar por caja.

En noviembre, con la aprobación del Presupuesto 2024, el Congreso aumentó las remuneraciones de profesores, técnicos, docentes universitarios y otros trabajadores públicos, lo que supuso un gasto extraordinario de S/ 3,680 millones. La ley no fue observada por el gobierno.

Y mientras los gastos aumentan por decisión del Parlamento, la recaudación baja, también a capricho de los otorongos y otorongas.

Desde agosto del 2022 los restaurantes sólo pagan el 8% de IGV. Fue una iniciativa del fujimorismo y,

según cálculos de la Sunat, hasta diciembre de este año hará perder al país S/ 1,038 millones en recaudación.

"La situación que está provocando el Congreso es muy preocupante. Se está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y reduciendo el espacio para gasto realmente productivo. Este gobierno, en lugar de reducir el déficit fiscal, lo sigue abriendo. En abril ya hemos tenido 3,6% de déficit fiscal", dice el exmi-

nistro de Economía Alonso Segura.

"Estamos en un deterioro continuo de la política fiscal. Tenemos un ministro de Economía que actúa de manera poco diligente y que está fallando en todo y encima critica al BCR. El problema no es solo el Congreso sino también el TC que ha permitido esta situación y el MEF que no hace nada", añade Segura.

En febrero del 2022 el Congreso creó de un porrazo 44 nuevos distritos. La implementación aún no ha concluido y el dispendio se cuantificará próximamente. Esto ha sido sólo un botón de muestra. ■

Motín a bordo

► El partido más conservador estalla congresalmente en dos mitades. No fueron ideas sino egos, privilegios y menudencias los factores de separación

ALONSO ZAMBRANO

La ultraderecha local ha implosionado. “Porky”, el mandamás de Renovación Popular, aspiraba a imponerse con un golpe de mesa, pero los almirantes le respondieron con un motín que terminó en escisión. Con el partido debilitado y la bancada dividida, la pelea de los ultraconservadores es por el mobiliario, las oficinas y las cuentas —las de caja chica y las redes sociales—.

“El asesor de prensa (Ricardo Berjón) se ha ido con ellos. Se han quedado con las cuentas de Twitter y Facebook y les han cambiado el nombre. Prácticamente todos los asesores de la bancada respondían al señor Montoya. O sea, se han quedado con casi toda la plancha de asesores (...). También se han quedado con la oficina. Si realmente tienen ética, principios, moral y honor como ellos señalan, deberían entregar la oficina a la bancada de Renovación Popular primigenia, pero no quieren salir y están ahí”, dice Alejandro Muñante.

El parlamentario Muñante encabeza el bloque fiel a López Aliaga. Y lo secundan los congresistas María Jáuregui, Miguel Ciccía, Jorge Zeballos y Noelia Herrera.

El bloque de los “disidentes” que capitanea Jorge Montoya se ha rebautizado con el nombre de “Honor y Democracia”. Se sumaron al motín los congresistas José Cueto, Javier Padilla, Gladys Echaíz, Héctor Acuña Peralta y el parlamentario andino Gustavo Pacheco.

“Esta ruptura ha sido muy desordenada. Y ni siquiera es por un tema ideológico, porque

todos los miembros de Renovación Popular siguen siendo conservadores (...). Lo que hubo aquí es un choque de intereses entre los congresistas. Ahí se ve el poco liderazgo que tiene López Aliaga para generar acuerdos”, dice Katherine Zagarra, politóloga de la PUCP.

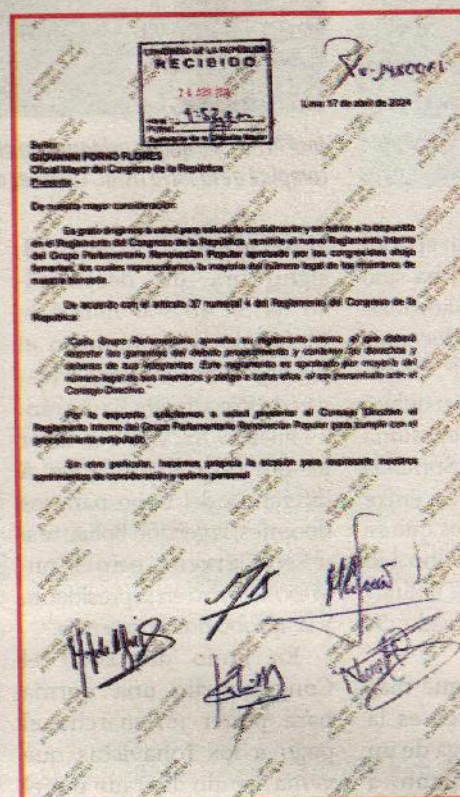
Hace más de un año que López Aliaga y los almirantes Montoya y Cueto no mantienen comunicación directa. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 19 marzo, cuando el primer ministro Gustavo Adrianzen se reunió con la bancada de Renovación Popular durante los prolegómenos al voto de confianza. El alcalde acudió para aparentar que estaba al mando de la agrupación.

El encuentro culminó con una foto protocolar en la que Rafael López Aliaga y Jorge Montoya estaban sentados uno al lado del otro. Testigos del encuentro confirman que, más allá de los gestos protocolares, no se dirigieron la palabra. Todo lo que sigue son golpes de distinto calado desde ambos bandos.

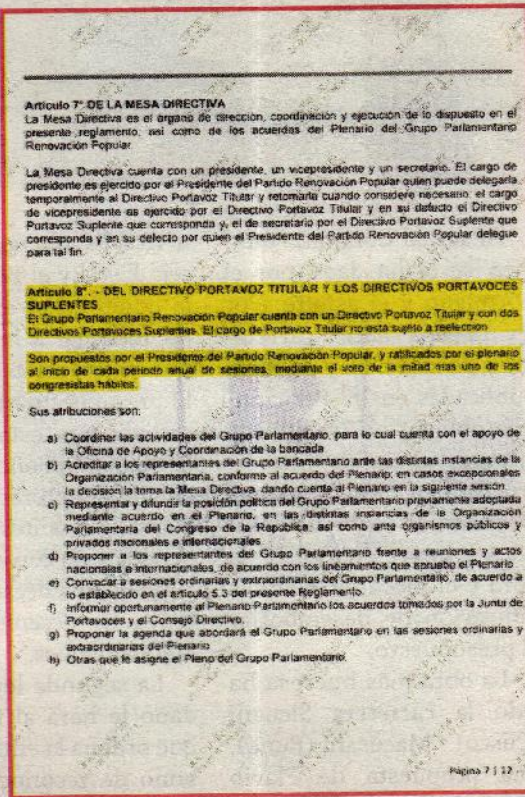
“El vínculo se rompió desde que el señor Montoya decidió acudir a un llamado de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Nosotros fuimos acompañándolo, creyendo que estábamos yendo con la venia del presidente del partido (...) pero la decisión nunca le fue comunicada”, dice Alejandro Muñante. Tras aquella cita palaciega —asegura Muñante— comenzó una insubordinación crónica a las decisiones de López Aliaga. “Eso se tradujo en votos disidentes dentro de la propia bancada (...). El presidente del partido disponía a qué ministro se debía o no interpellar, pero si Jorge Montoya y compañía decidían otro tema, ellos vota-

Rafael López Aliaga: quiso recuperar el control de su bancada y lo que produjo fue un cisma.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA



El oficio que los cinco congresistas allegados a López Aliaga enviaron al oficial mayor del Congreso el pasado 27 de abril. Solicitaron que se apruebe “por mayoría” el nuevo reglamento de la bancada.



El nuevo reglamento aprobado por López Aliaga y su bloque de congresistas. Se crea la figura del “directivo portavoz titular” designado a dedo por el presidente de Renovación Popular.



FOTO JOEL DURÁN

Jorge Montoya y Alejandro Muñante: desde hace más de un año ambos encabezaban dos bloques visiblemente enfrentados.



FOTO JOEL DURÁN

"A mí me han excluido de la bancada y yo no voy a ser obstáculo de nadie", dice Gustavo Pacheco, quien fue parlamentario andino de Renovación Popular. Renunció al partido el pasado 27 de mayo.

ban sin importar esa opinión", agrega el congresista.

Hasta en los chats de WhatsApp López Aliaga era ignorado olímpicamente por su propia bancada. "Inicialmente había dos grupos de WhatsApp. Uno con el presidente del partido y otro sólo de congresistas. Desde hace un año López Aliaga escribía mensajes con directivas en el chat, pero el bloque de Montoya no le hacía caso", dice un asesor de Renovación Popular. "Por ejemplo, el ingeniero Rafael López Aliaga no estaba de acuerdo con interpelar a la ministra Hania Pérez de Cuéllar. Y lo puso en el chat, pero nadie le respondió

y la votación quedó dispareja", agrega la fuente.

Montoya es vocero de la bancada desde el 2021. Subrayan en la facción contraria que no ha sido ni por su capacidad de liderazgo ni de negociación sino por una cuestión matemática. El almirante tenía la mayoría de votos a su favor: de los nueve parlamentarios que integraban el grupo, cinco estaban con él.

La situación era insostenible. Así que el grupo de Muñante convenció a López Aliaga de que, para recuperar el control de la bancada, era imprescindible quitarle a Montoya la vocería. Como era impensable



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

La antigua oficina de la bancada de Renovación Popular. En menos de una semana cambiaron todos los afiches por los de "Honor y Democracia".

que el marino diera un paso al costado, idearon una estrategia más elaborada. En mayo del 2023 López Aliaga y el consejo directivo de Renovación Popular cambiaron el estatuto del partido.

El primer golpe de timón fue introducir la figura del "directivo portavoz titular", una persona que sería designada a dedo por el presidente del partido, que contaba con voz y voto en la bancada del Congreso.

Para menoscabar el poder de Montoya el nuevo reglamento suprimió el voto a los parlamentarios andinos en las reuniones de bancada. Renovación Popular sólo tiene un

representante en el Parlamento Andino: Gustavo Pacheco, un fiel escudero al servicio de Montoya.

Las modificaciones en los estatutos eran un torpedo que apuntaba directamente al almirante que, sin embargo, no lo vio venir. Dicen en su bando que fueron maniobras secretas.

Los cambios en el estatuto se decidieron en reuniones del partido —el bando del almirante no acudía a esos cónclaves— y no se comunicaron a la bancada hasta un año después, lo que ocurrió la última semana de abril pasado.

Fue a través de una carta y con carácter de urgencia que

Muñante y otros cuatro congresistas solicitaron a Montoya convocar a una reunión de bancada para adaptar el reglamento al nuevo estatuto de Renovación Popular. Como el almirante se negó a programar la reunión, los cinco congresistas fieles a "Porky" mandaron un oficio al oficial mayor del Congreso aprobando el nuevo reglamento "por mayoría". Lo que siguió fue la ola de renuncias que ya se conocen.

"Inicialmente dieron a entender que recién enviaban el documento para aprobación, pero luego nos enteramos que era para que se tramite directamente (...). Nunca nos avisaron nada pese a que el congresista Muñante se sienta al costado del almirante Montoya", dice el congresista José Cueto, quien renunció a Renovación Popular el 24 de mayo.

"Yo he estado en la bancada, he firmado todos los pronunciamientos, he estado en todas las sesiones, he cumplido con todas las obligaciones. A mí me han excluido", dice el parlamentario andino Gustavo Pacheco, exsecretario general de Renovación Popular.

Pacheco renunció al partido el 27 de mayo tras enterarse de que el nuevo estatuto lo dejaba sin voto. Inmediatamente se enroló en la bancada "Honor y Democracia". Acusa a "Porky" y a Muñante de haberle arranchado la camiseta de Renovación Popular y reclama derechos de autor.

"A ver, perdón, el secretario general de Renovación Popular fui yo. El fundador soy yo. Claro que somos los mismos (...). El almirante Montoya y el almirante Cueto siguen siendo voceros. Se mantiene la misma estructura. Los asesores son los mismos", argumenta Pacheco.

Alejandro Muñante le propina un último golpe a Montoya. Dice que no fue "transparente" con los aportes económicos que hacían los congresistas a la bancada. "A mí se me descontaba 500 soles, porque ese fue el acuerdo (...). Pero después, al ver que no había un reporte de gastos ni nada por el estilo, yo mandé un oficio para reducir ese descuento. Hay otros congresistas —dice Muñante— que sí aportaban con normalidad todos los meses 500 soles. La pregunta es: ¿en qué se gastaba? No se sabe, nunca se nos reportó nada". ■

Pelota al centro

► Preparan una ley que les quita autoridad a los municipios y pretende extender a 10 años la vigencia de los certificados de Defensa Civil

RICARDO VELAZCO

María del Carmen Alva renovará votos con los suyos. Alista un proyecto de ley para extender de dos a diez años la vigencia de los certificados de Defensa Civil que se entregan a los locales comerciales. Detrás de la iniciativa que amadrina Alva está la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).

La semana pasada Carlos Neuhaus, presidente de ACCEP, reveló a esta revista que fue uno de los ideólogos de la "Ley Nano", una norma que "acotó" las fiscalizaciones municipales. La ley la impulsó el fujimorismo y se aprobó con los votos de 86 parlamentarios. "Esa ley que apoyamos, que generó Nano Guerra y la trabajó con Alejandro Caverro, logramos sacarla adelante", explicó Neuhaus a esta revista. Y en la misma entrevista anunció que actualmente está afinando los detalles de una secuela de la mentada ley.

"El siguiente paso es impedir los abusos de las oficinas de Defensa Civil que están a las órdenes de los alcaldes", indicó.

Según Neuhaus, "chicos, medianos y grandes empresarios" han unido esfuerzos para evitar que "alcaldes abusivos" continúen clausurando locales como el cierre temporal de la planta de Backus ordenada por la Municipalidad de Ate tras hallar basura y desechos tóxicos fuera de los puntos establecidos. Para acabar con "estos abusos" —asegura Neuhaus— tiene a "un equipo" trabajando con la congresista María del Carmen Alva. El

proyecto marcha a todo tren.

El pasado 2 de abril la parlamentaria acciopopulista presentó un proyecto de ley para modificar "la vigencia del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones", bajo la premisa de "promover la inversión privada y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa". Avalaron el proyecto con su firma los congresistas Juan Carlos Moris, Karol Paredes y Silvia Monteza.

Actualmente, las municipalidades expiden un certificado de Defensa Civil con una vigencia de dos años. El documento es indispensable para tener la licencia de funcionamiento. Lo que propone Alva es ampliar la duración del certificado a diez años. El proyecto ha alarmado a los especialistas.

"Esta propuesta es descabellada. Si con el certificado de seguridad actual hacemos malabares para que se cumpla la ley, imagínese con una duración de diez años", dice Nancy Barrenechea, representante de los inspectores de seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú.

El pasado 24 de abril Barrenechea le envió una carta a la congresista Alva advirtiéndole del peligro que supondría para los ciudadanos aprobar el proyecto.

"Este proyecto cuenta con un mal antecedente. En el 2014 un decreto supremo otorgó una vigencia indeterminada a los certificados de seguridad. Después se revirtió la medida por las tragedias que sucedieron", dice a este semanario el arquitecto Leni Vásquez Aranda, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Vásquez se refiere al incendio que arrasó el centro comercial APIAT, en Trujillo, en junio

María del Carmen Alva es la autora del proyecto de ley para estirar la vigencia de los certificados de Defensa Civil.

FOTO CÉSAR ZAMALLOA



FOTO JOEL DURÁN



"Chicos, medianos y grandes empresarios nos hemos unido para evitar que alcaldes abusivos estén cerrando locales", dice Carlos Neuhaus.

Leni Vásquez: "El proyecto actual cuenta con el mal antecedente del 2014 cuando se declaró que los certificados de Defensa Civil tendrían una duración indeterminada".



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Dennis Orué, inspector en temas de Defensa Civil: "Los accidentes como los incendios del cine UVK y la galería Nicolini pusieron en evidencia las condiciones de inseguridad".



El incendio en el cine UVK de Larcomar ocurrió en noviembre del 2016 y dejó cuatro trabajadores muertos.



Llamas en la galería Nicolini, en el Centro de Lima. Ocurrió en junio del 2017 y dejó dos trabajadores calcinados.

del 2016. Cinco meses más tarde fallecieron cuatro personas en un incendio en el cine UVK de Larcomar. Y meses después, otro voraz incendio consumió la galería Nicolini en el Centro de Lima y terminó con la vida de dos empleados que estaban trabajando encerrados en unas habitaciones de metal instaladas ilegalmente en la azotea.

“Esos pisos extras no estaban autorizados y no se habían inspeccionado”, señala Yván Rodríguez, expresidente de la

comisión de Defensa Civil del Concejo Municipal de Lima.

Dennis Orué, otro inspector certificado que ha trabajado para una decena de municipalidades, señala que esos “accidentes emblemáticos pusieron en evidencia las condiciones de inseguridad y el poco respeto que se tiene a los reglamentos en los establecimientos comerciales, así como la poca capacidad de fiscalización de los gobiernos locales”.

“Los certificados indetermi-

nados fueron un arma de doble filo porque simplificaban temas burocráticos, pero se daba libertad irrestricta a los empresarios. Y el certificado de diez años es volver nuevamente a un escenario de inseguridad e incertidumbre. Además, es un proyecto muy general que no distingue qué tipo de rubros comerciales podrían acogerse. Eso es muy peligroso”, explica Orué.

Los expertos advierten que el proyecto Alva contempla que

los empresarios serán quienes comuniquen al municipio cualquier cambio en las medidas de los locales.

Abundan los ejemplos sobre empresas, especialmente centros comerciales, que alteran sus criterios de seguridad estructural sin alertar a las autoridades. En enero del 2023 la Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente Larcomar luego de detectar que carecía de luces de emergencia, señalización de rutas de eva-

cuación y un sistema centralizado de detección de humo. Parque Arauco, la empresa que opera el mall, permitió que los cines siguieran funcionando mientras se hacían trabajos de remodelación, según denunció “El Comercio”.

Dos meses después, la municipalidad de Ate cerró temporalmente el Real Plaza Puruchuco, del grupo InterCorp, debido a que la administración había ocupado pasadizos y rutas de evacuación. Además, varios locales habían cambiado el rubro de los negocios sin actualizar los certificados de Defensa Civil.

Lo mismo ocurrió con el centro comercial Mall del Sur en San Juan de Miraflores, del Grupo Wong. En junio pasado el municipio clausuró el centro 48 horas. “Se ordenó la medida porque habían replanteado los planes de evacuación de las áreas comunes sin avisar y habían retirado un gabinete de incendios que correspondía a una zona de cines”, recuerda Dennis Orué, exinspector de esa comuna.

Hace dos meses fue clausurado el Mall Aventura, del Grupo Ripley, en San Juan de Lurigancho, por organizar conciertos en zonas en construcción. Un caso más grave fue el del mercado Valle Sagrado, en Canto Grande, donde los inspectores hallaron pasadizos y puertas de evacuación bloqueados, extintores sin mantenimiento y balones de GLP en instalaciones precarias.

El gremio de empresarios que encabeza Neuhaus alega que los permisos de Defensa Civil alientan la corrupción. Pero los expertos en asuntos municipales que han revisado el proyecto de Alva y compañía advierten que, de aprobarse, el trueque de certificados por coimas se disparará.

“Lo que avala teóricamente el proyecto de ley es que luego de que un inspector de Defensa Civil le haya aprobado un certificado de diez años a un negocio, aparezca un fiscalizador de la misma municipalidad, invalide el certificado, le pida 50 cosas más al dueño y le dé 30 días para resolverlo. Es en ese periodo cuando se generan los arreglos ilegales debido al apuro de los empresarios por volver a funcionar. Esos casos proliferarían si se aprueba la ley”, dice Carlos de la Rosa, abogado y conductor del podcast “El Especialista Municipal”. ■

► El gobierno, el Congreso y la situación social y económica convierten en verosímiles, electoralmente hablando, las opciones radicales. Es la opinión de los expertos

BRUNO AMORETTI

Un fantasma recorre el Club Nacional y sus anexos: si mañana se realizaran las elecciones Antauro Humala sería el candidato con más chances de pasar a segunda vuelta. La pesadilla que la derecha vivió el 2021 podría resultar una broma de mal gusto. Los expertos entrevistados para este informe coinciden en que el discurso radical de Antauro es especialmente atractivo para el electorado frustrado y harto de la crisis social y económica que sacude al país.

“Hemos hecho sondeos privados, no hemos publicado nada aún. En rasgos generales te puedo decir que Antauro es una posibilidad. Es la tendencia que apunta sobre este personaje. El panorama es aún disperso por la cantidad de nombres voceados. Ninguno supera el 12%”, afirma Urpi Torrado, gerente general de Datum.

Pese a que un 77% de la población se muestra a favor de un adelanto de elecciones, sólo el 17,6% puede mencionar a su posible candidato, de acuerdo con el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Dentro de ese grupo, Antauro Humala lidera las preferencias junto a Keiko Fujimori.

“Estas elecciones van a tener una coloratura muy inclinada hacia los radicalismos. Antauro Humala está apuntando a recoger un mar de resentimientos con una receta muy directa, populista y punitiva. Tiene

El Antaurazo



FOTO ARCHIVO

Antauro Humala en Puno: si las condiciones de hoy prevalecieran, el candidato extremista pasaría a la segunda vuelta.

la posibilidad de afianzarse en ese espacio electoral y podría acceder a una segunda vuelta”, señala Rodrigo Gil, docente e investigador del IEP.

Omar Castro, gerente general de CPI, sitúa geográficamente a Antauro Humala. “Hay un cansancio y una indignación respecto a la clase política. En el sur —explica Castro— Antauro lidera la intención de voto, que es el mismo voto que permitió que ganaran su hermano Ollanta y Pedro Castillo”.

Para Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, Humala es actualmente el candidato del *antiestablishment*. Su principal rasgo es generar una conexión emocional con aquella ciudadanía harta de un Estado incapaz y jaqueado por la corrupción.

“Nadie puede saber hoy el peso electoral exacto que tiene Antauro, pero lo que sí podemos saber es que, en el sector que rechaza la política oficial y tradicional, él es quien más relevancia ha tomado”, sostiene Benavente.

Humala, que recientemente realizó una gira por varias ciudades de Cajamarca, ha acaparado nuevamente la atención por sus recientes declaraciones. Ha prometido “fusilar a la derecha vendepatria”, recuperar el Morro de Arica, “desaparecer” a la Confiep y promover la “minería nativa”.

El centro de operaciones de Humala se encuentra en la cuadra dos del jirón Quilca, en el centro de Lima. Allí cuelga, a modo de mandamientos, el decálogo de su partido A.N.T.A.U.R.O. Promete, entre otras cosas, la “renacionalización de todo lo extranjerizado”, la “supresión de todos los peajes carreteros”, la “expropiación de todos los canales de propiedad privada” y la “restitución de la Constitución seminacionalista de 1979”.

En los últimos meses han empezado a aparecer pintas de Humala en distintas regiones del país aludiendo al presidente salvadoreño Nayib Bukele. “Vamos a ‘bukelizar’ el Perú”, decía una publicidad en Loreto. El propio Antauro ya lo utiliza como eslogan en sus mít-

nes. “Vamos a ‘bukelizar’ el país desde arriba y desde abajo”, dijo el exconvicto no hace mucho en Trujillo, por donde anduvo de gira.

Sinesio López, sociólogo y profesor de la Universidad San Marcos, cree que la derecha, “para salir del eje fujimorismo versus antifujimorismo, busca vender la narrativa de hampones versus gente tranquila y civilizada, y eso beneficia a Antauro”.

“El problema es el mismo país, el modelo económico, el sistema social y político. Lo que buscan —dice López— es que la gente se preocupe solamente en la inseguridad, y por eso la política se ‘bukeliza’. La derecha, consciente o no, está trabajando para Antauro Humala”.

“En realidad, Bukele es un derechista, no es un nacionalista. Pero a Antauro lo que le importa es el efectismo radicalista. No hay propuestas, utiliza una política ideológica, no programática. Antauro no dice cómo resolver los problemas del país. Lo que dice es que hay que destruir y fusilar”, explica Luis Benavente.

El auge de los extremismos es un fenómeno mundial que va a favorecer a Antauro. “Ahora los candidatos más atractivos son los de ideas radicales. Esas condiciones lo favorecen”, explica Benavente.

Y para hacer frente a un extremista que dice ser de izquierda, la política local ofrece un radical de derecha. “Rafael López Aliaga se ha colocado a la derecha de Keiko. Él puede salir con el discurso de ‘nosotros vamos a evitar el triunfo de Antauro, también con mano dura’. Las posibilidades de que aparezcan discursos similares a los de Antauro son bastante altas”, señala el sociólogo Fernando Tuesta.

Urpi Torrado advierte que el 20% de electores apostará por una propuesta radical. “Ese porcentaje se puede dividir entre dos candidatos o más, y se anulan entre ellos. La fortaleza de Antauro también puede ser su debilidad”, afirma Torrado.

Castro, de CPI, ensaya una explicación de por qué Humala tiene acogida en cierto sector. “La campaña



FOTO ARCHIVO

Urpi Torrado, gerente general de Datum: “El 20% de electores apostará por una propuesta radical”.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Omar Castro, gerente general de CPI: “En el sur Antauro lidera la intención de voto”.



FOTO ARCHIVO

Eduardo Dargent, politólogo y docente de la PUCP: “Antauro sí es un peligro, pero no se trata de decir que ya está consumado”.



FOTO CÉSAR ZAMALLOA

Fernando Tuesta, analista político y sociólogo: “Las posibilidades de que aparezcan discursos similares a los de Antauro son bastante altas”.

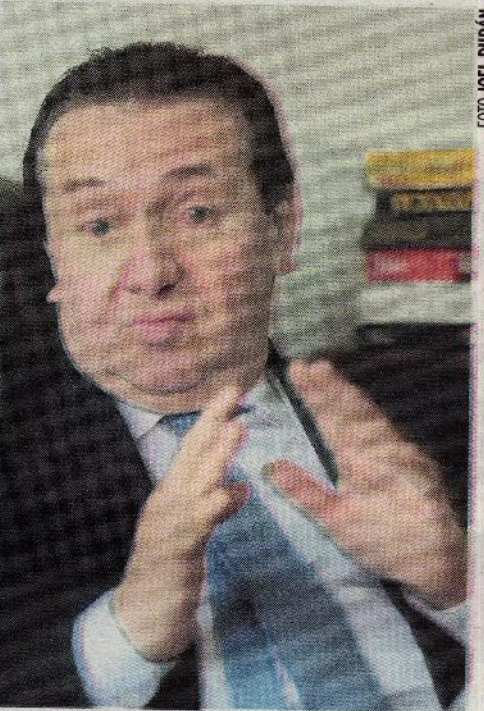


FOTO JOEL DURÁN

Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi: “El rasgo principal de Antauro es generar una conexión emocional con la ciudadanía harta de un Estado incapaz”.

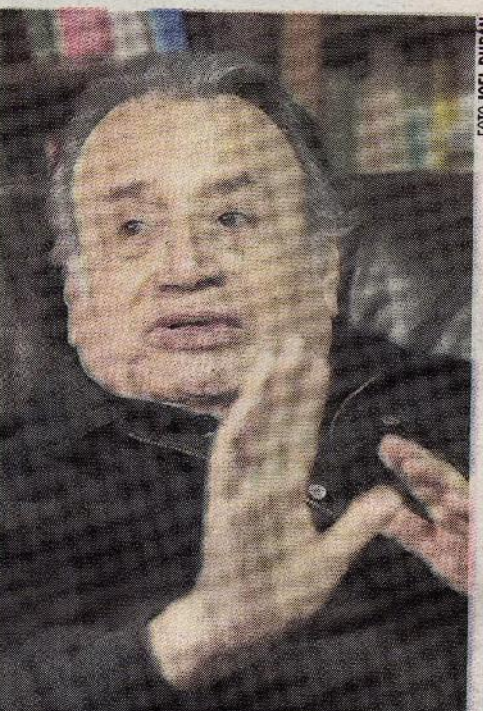


FOTO JOEL DURÁN

Sinesio López, sociólogo y profesor de la Universidad San Marcos: “La derecha, consciente o no, está trabajando para Antauro Humala”.

del fujimorismo en el 2021 era causar pánico y pronosticar un destino como el de Venezuela, pero nada de eso ocurrió. La pregunta que deben hacerse los opositores de Humala es: ¿Cómo va a tener miedo a perderlo todo una persona que no tiene nada?”, apunta Castro.

“Antauro sí es un peligro, pero no se trata de decir que ya está consumado”, señala Eduardo Dargent, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica. “(...) Los nuevos grupos políticos —agrega— deberían buscar propuestas atractivas porque al *establishment* actual es muy poco lo que se le puede pedir. Están ensimismados y disfrutando de su estabilidad a espaldas de la ciudadanía”.

“Ya en este momento hay 28 partidos inscritos, podemos llegar tranquilamente a 35 y la oferta va a crecer enormemente. Pedro Castillo apareció en marzo del 2021. En el Perú no siempre el que empieza antes cosecha triunfos”, afirma Tuesta.

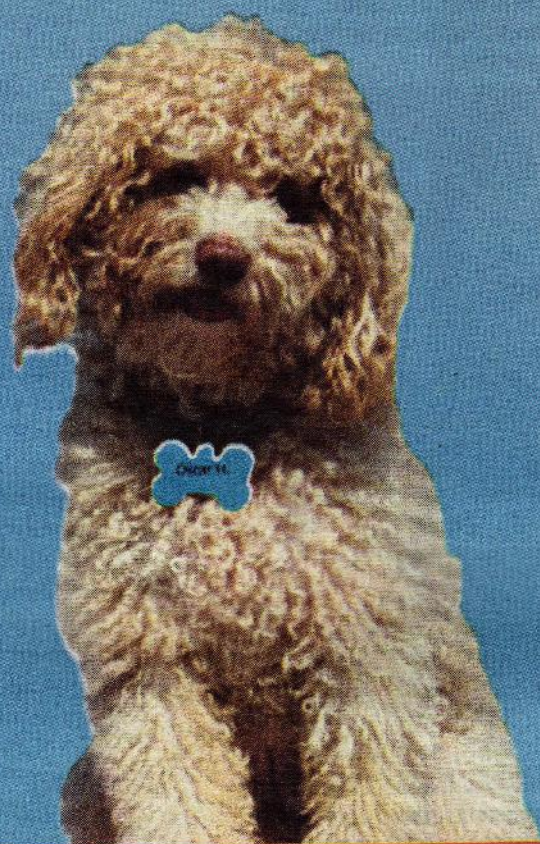
Rodrigo Gil, del IEP, apunta a que el actual gobierno también está contribuyendo a impulsar una candidatura radical. “Este gobierno es altamente percibido como corrupto, débil y, además, no resuelve problemas fundamentales como la inseguridad y la inestabilidad económica. Lo que está haciendo el gobierno es profundizar más esas fracturas sobre las que se construye el voto crítico”, afirma Gil.

Para evitar que Antauro se convierta en un peligro real el Congreso empezó a cocinar una reforma constitucional que impida la candidatura a sentenciados por asesinato, secuestro, traición a la patria y otros delitos. El hermano de Ollanta Humala, exconvicto por el asesinato de cuatro policías, quedaría fuera de carrera antes de empezar. Pero la reforma está en la congeladora porque los congresistas temen un efecto búmeran que acabe con la candidatura de sus “jefes”.

“La certeza que tenemos —dice Omar Castro, de CPI— es que cualquier candidato que se enfrente a Keiko Fujimori va a ganar”. ■

La llamada de la tribu

Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea. Ayúdanos a continuar.



Plutón Editores S.A.C.

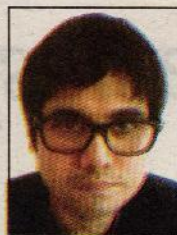


Dona aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Pequeñas alegrías



JUAN MANUEL ROBLES

Circula por ahí la información de que el periodista Gustavo Gorriti habría celebrado el día del suicidio de Alan García,

que ocurrió cuando el expresidente se vio acorralado por la justicia y unos policías estaban a punto de detenerlo. Tiene toda la pinta de ser una noticia falsa, parte de la campaña de los troles que quieren desacreditar al director de IDL-Reporteros por su trabajo, alimentando la narrativa delirante de que los fiscales provocaron la muerte de García. No imagino a Gorriti haciendo esas cosas. Pero me quedo pensando en algo: ¿qué tendría de malo? Digo: solo los periodistas de investigación — los de verdad — saben lo que significa pasar meses y hasta años recabando evidencias, juntando testimonios, confirmando delaciones para que al final todo el esfuerzo se vea reflejado en una detención que pueda neutralizar a un elemento que hace daño a la sociedad. Eso siempre será algo digno de celebrar. En el caso de García, fue él quien decidió cómo irse. La justicia hizo lo suyo, le tocaba ser suficientemente hombre para enfrentarla, o un cobarde bandido. Eligió lo segundo, pero eso no empaña la victoria de quienes actuaron bien.

Los peruanos de a pie por supuesto que celebramos en abril de 2019, cuando recibimos la noticia de que Alan García iba a ser detenido por la policía, y que lo iban a enmarcar como el delincuente que siempre fue. En mi caso, enterarme de su muerte esa misma mañana me quitó las ganas de celebrar con cervezas; de hecho, ya había fiestas confirmadas para esa misma noche, que fueron canceladas al saberse la noticia. Es posible que esa haya sido —en parte— la intención del líder aprista. Al fin y al cabo, hablamos

de un hombre que siempre se rio de nosotros, que siempre se las arregló para aguaros la fiesta.

Es tan poderoso ese rasgo de

la personalidad de García que hay enemigos suyos que aún temen seriamente que esté vivo: como si la mente criminal hubiese guarda-



Brindis con vino cuando un capítulo de la impunidad termina gracias al trabajo de los fiscales.

PUES JUSTAMENTE EN MOMENTOS OSCUROS COMO ESTOS ES CUANDO CONVIENE AFERRARNOS A PEQUEÑAS VICTORIAS COMO LA DE ESE DÍA DE ABRIL DE 2019, EN QUE UN EQUIPO DE FISCALES DOBLEGÓ A UN ENEMIGO QUE PARECÍA INVENCIBLE

do un último truco, una vuelta de tuerca en el epílogo, a lo *Ocean Eleven* o *La casa de papel*. Toda teoría de conspiración es seductora, pero las que dicen que García está vivo perturban porque atizan el miedo a que, una vez más, se haya salido con la suya, que nos haya hecho cholitos, muy peruanamente, como tantas veces.

He reflexionado luego si ese pudor que me impidió celebrar era realmente necesario. Porque era claro que no estábamos felices por la muerte de un hombre. Lo estábamos por el final de su impunidad. Era 2019. Meses más tarde, el planeta iba a entrar en cuarentena y el mundo se iba a detener. Perú se preparaba para su año más triste (todos perdimos a alguien) y el castillo neoliberal de prosperidad falaz iba a colapsar con una crisis económica de la que nunca terminaríamos de salir.

Tal vez —pensé luego— era importante valorar ese pequeño triun-

fo como se merecía.

Hoy veo cada más en la prensa la expresión “la luz al final del túnel” como eso que precisamente no llegamos a ver, dada la profundidad de la crisis actual y la manera en que el congreso mafioso va tomando todo lo que importa. Nos estamos volviendo un país desesperanzado, derrotado, que tira la toalla. La confirmación de que el 42% de peruanos piensa en emigrar, según el Instituto de Estudios Peruanos, confirma esa desazón.

Pues justamente en momentos oscuros como estos es cuando con-

viene aferrarnos a pequeñas victorias como la de ese día de abril de 2019, en que un equipo de fiscales doblegó a un enemigo que parecía invencible. Siempre lo he creído, pero se hizo muy patente para mí hace poco, cuando la Junta Nacional de Justicia decidió por fin destituir a la fiscal Patricia Benavides por interferir en favor de su hermana (quien estaba acusada por indultar a más de cuarenta narcotraficantes, ¡malditos indultadores de narcos!). Benavides, además, es la presunta líder de una red criminal en el Ministerio Público, que jugó en pared con congresistas turbios. Hoy está neutralizada. El trabajo de la prensa independiente dio sus frutos.

¿Da para ser optimistas? Lo dudo. Pero al menos permite respirar, esbozar una sonrisa, sacar las chelas con los amigos.

Es un hecho que nos recuerda que, como a fines de los noventa, serán algunos periodistas, algunos medios, algunos fiscales, algunos jueces, los que resistirán con todo hasta que la gente despierte de su letargo. Esos elementos están allí y el ¡salud! debe ir para ellos.

Me da risa que, en su delirio rufiano, elementos del Congreso quieran investigar a los fiscales que hace años cercaron a Alan García. Caraduras. En realidad, esos fiscales deberían dar una charla TED en la que nos cuenten la historia que terminó con la orden de detención de Alan García, todos los escollos encontrados, los rastros ocultos, los testigos que súbitamente se retractaban, como en *El Padrino*. Necesitamos fábulas así, que inspiren, que podamos ver una y otra vez en Youtube, y que nos hagan recordar que, no importa el radio de influencia de estos titanes de la corrupción ni su poder momentáneo, las personas decentes somos más. ■

Alianza de desprestigios



CARLOS LEÓN MOYA

Alguien tenía que emplazar a Dina Boluarte, la presidenta más desprestigiada de América Latina, según el último Latinobarómetro, y la menos aprobada en toda la historia de los sondeos de opinión en el Perú.

No lo iba a hacer este congreso, el más desprestigiado de América Latina, según el último Latinobarómetro, y a 4 puntos porcentuales de ser el menos aprobado en toda la historia de los sondeos de opinión en el Perú.

Lo hizo el Ministerio Público, recién recuperado de una jefa que canjeaba archivamientos de investigaciones a cambio de votos del congreso.

Es muy probable que la acusación constitucional contra Boluarte que presentó el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sea rechazada por este congreso. Sin embargo, eso no quita la fuerza que tiene su sola presentación. Por un lado, es un dardo político para ella. Boluarte no es una pobre víctima de agentes siniestros y manifestantes radicales, sino una presidenta tan torpe al esconder sus delitos que la propia fiscalía la acusó durante el ejercicio de sus funciones. Por otro, es un dardo político hacia el congreso. Desde el 2021, se llenaron la boca pidiendo a los fiscales de la nación que acusen a los presidentes en funciones. Primero, inhabilitaron a Zoraida Ávalos porque investigó, pero no acusó, a Martín Vizcarra. Luego, aplaudieron como focas cuando Patricia Benavides acusó a Pedro Castillo. Entonces, si hubiese lógica, tendrían que aceptar también la acusación de Villena. Pero eso no se le puede pedir al congreso más odiado de América Latina.

Además de esto, la acusación cons-

titucional quedará para el futuro como una constancia de lo evidente que era, durante su propio mandato, la degradación que Dina Boluarte hacía de este. Nadie podrá decir: "yo no sabía". Las pruebas son muy claras. Los congre-

sistas que den la espalda a la acusación quedarán con un cartel que dirá: "yo sí sabía, pero como no era Pedro Castillo voté en contra".

Ahora bien, en las 62 páginas de la acusación, se aprecia claramente que:



La mafiosa bancada del fujimorismo en plena grito de lobistas, operadores del crimen y hasta modestas tenderas.

SE LES PODRÁ DECIR, CON TODA JUSTICIA, QUE TUVIERON UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL MUY CLARA EN SUS NARICES Y NO HICIERON NADA SOLO POR NO PERDER UN ESCAÑO EN EL QUE NADIE LOS QUIERE MÁS

1) Boluarte recibía a Wilfredo Ocorima en su despacho porque ella es así con cualquier persona, como quiso insinuar, sino que tenía una relación privilegiada con él.

2) No hay ningún testigo que haya visto a Ocorima sacarse un reloj Rolex de la muñeca para supuestamente prestárselo a Boluarte, ni la supuesta devolución voluntaria de estos. El testimonio de la coartada de Boluarte, la exfuncionaria Carmen Giordano, es muy poco creíble: dijo que no estuvo en ninguna reunión con ellos, sino que vio el ademán de la entrega del reloj desde afuera del despacho, porque ella siempre deja "las puertas abiertas". Sin embargo, dos funcionarios de Palacio de Gobierno dijeron que eso no suele ocurrir.

3) El intercambio de los relojes y las pulseras era por presupuesto. Pero no eran un punto de partida, sino un punto de llegada. No eran un adelanto, sino un honorario de éxito. No es que el MEF empezara una transferencia presupuestal cada vez que Ocorima le entregaba un Rolex a Boluarte. Era al revés: que cada vez que Ocorima estaba por recibir una transferencia presupuestal extraordinaria, iba ese mismo día al despacho presidencial con un Rolex o una pulsera Bangle y se la entregaba a Boluarte. Así ocurrió al menos tres veces. Más que una ofrenda, era un premio de Pavlov. A Boluarte la condicionaron: decreto de urgencia, premio, reloj; entrego presupuesto, salivo, pulsera.

4) Tan era por presupuesto que el ministro de Economía, Alex Contreras, botó a inicios de este año a la Directora General de Presupuesto Público, Jessica Roxana Camacho Medina. Según ella, Contreras le dijo que la sacaba por "motivos políticos, porque el equipo de la presidenta de la República no estaba contento con mi trabajo".

En otras palabras, botaron a la persona que tenía la llave de la caja fuerte del Estado por pedido de la Dama de Cao, llena de joyas. Pero ¿por qué no le gustaría a Boluarte el trabajo de la persona encargada de negar la llave de la caja fuerte? La única razón es justamente esa: porque negaba la llave. Porque querían transferir más plata de la caja fuerte, y eso se

traduciría en más joyas y más relojes y en que Boluarte se convirtiese finalmente en el Señor de Sipán.

El gobierno podrá decir que esto es una persecución, el congreso podrá decir que la fiscalía se extralimitó, pero ninguno podrá eliminar las pruebas del accionar de Boluarte. Ningún congresista podrá decir que no sabía. Tiempo después, se les podrá decir, con toda justicia, que tuvieron una acusación constitucional muy clara en sus narices y no hicieron nada solo por no perder un escaño en el que nadie los quiere más. Y que por eso son, merecidamente, el congreso más desprestigiado de América Latina blindando a la presidenta más desprestigiada de América Latina y de la historia entera del Perú. ■

Mufarech

Lima, 27 de mayo del 2024
Sr. Director

De mi mayor consideración:
He sido mencionado con adjetivos de alto tono por el Sr. Mufarech en el reportaje que hace el periodista Ricardo Velazco "Tucán o Fénix". En primer lugar, el Sr. Mufarech renunció a la vicepresidencia del PPC con comunicación a

Carlos Neuhaus, presidente del PPC, la cual fue recibida por medio electrónico el 15 de abril del 2024, siendo aceptada su renuncia el 20 de mayo indicando que "daremos cuenta a las autoridades respectivas con la brevedad del caso" (anexo renuncia).

Sobre los adjetivos proferidos por el Sr. Mufarech hacia mi persona, debo hacer constar que ya son un estilo repetitivo de una personalidad controversial que viene de los años 80 cuando renunció por primera vez al PPC, también adjetivando de traidor al presidente y

fundador del PPC Luis Bedoya Reyes, como consta en la entrevista que dio al diario "La República" el 1 de abril de 1984, entrevista además que lo pinta de cuerpo entero (anexo entrevista).

Agradezco la atención a la presente y se pueda publicar en la próxima edición del semanario.

Roberto Vigil Guerrero
DNI 08228029
Secretario Nacional de Organización
Partido Popular Cristiano

réplicas y dúPLICAS

Georgia contra las cuerdas



DANIEL ESPINOSA

Desde la segunda semana de abril, decenas de miles de georgianos vienen manifestándose en las calles de Tbilisi contra una ley de transparencia que la Unión Europea, Estados Unidos y la prensa corporativa occidental han tildado de “ley rusa”. La iniciativa legal –que obligaría a las oenegés operando en Georgia a registrarse como agentes extranjeros si reciben financiamiento de fuera que supere el 20% de su presupuesto– fue aprobada por el parlamento georgiano el último 14 de mayo, pero vetada por su principal opositora, la presidenta Salomé Zourabichvili, cuatro días después.

El pasado lunes 27 de mayo, el parlamento decidió rechazar dicho veto y sacar adelante la ley, lo que ha renovado el ímpetu de los manifestantes y la oposición. Por las calles de la capital georgiana también deambularon recientemente políticos extranjeros como el alemán Michael Roth, quienes en un acto de descarada intromisión están promoviendo activamente las protestas contra el parlamento, donde la mayoría de escaños pertenece al partido Sueño Georgiano. El primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, también pertenece a este partido conservador, la fuerza política dominante en el país.

En medio de una tensión creciente que nos recuerda lo ocurrido en Ucrania en 2014, Salomé Zourabichvili presentó públicamente su “Mandato para Georgia”, una suerte de hoja de ruta para la oposición: “...necesitamos una nueva realidad política... elecciones diferentes, un parlamento diferente y un gobierno diferente”, proclamó en compañía de quienes se oponen a la ley para regular a las oenegés. El gran problema con su “mandato” es que ese parlamento fue elegido democráticamente por los georgianos en sus últimas elecciones (2021), otorgándole a Sueño Georgiano 90 de 150 escaños y la prerrogativa de nombrar a un primer ministro.

En este país colindante con el Mar Negro operan unas 25,000 oenegés. Cerca del 90% son financiadas desde fuera y, en particular, por la red de instituciones asociadas a la National Endowment for Democracy (NED) estadounidense. Antes de volver a la situación en el Cáucaso, resulta indispensable revisar brevemente la historia de esta red de influencia política.

LA CARA PÚBLICA DE LA CIA

La NED fue creada en 1983 para atacar, desde adentro, a la Unión Soviética y a otros gobiernos no alineados, finan-

ciando a sus opositores domésticos y creando estructuras políticas paralelas a las oficiales. El gran logro de este fondo para la “promoción de la democracia” consiste en llevar a cabo de manera abierta lo que la CIA siempre hizo en secreto: promover oposiciones políticas subvencionando medios de comunicación y organizaciones civiles afines a sus propósitos.

Uno de los cofundadores de la NED, Allen Weinstein, la describió en términos casi idénticos en 1991: “Mucho de lo que hacemos hoy, la CIA lo hacía hace 25 años de manera encubierta” (David Ignatius, “The Washington Post”, 21/09/91). Algunos años antes, el presidente de la NED, Carl Gershman, ya había señalado que su institución había sido creada porque “sería terrible que grupos democráticos alrededor del mundo fueran vistos como (organismos) subsidiados por la CIA” (David K. Shipler, “The New York Times”, 01/06/86).

El artículo del “Times” también explica que “la perspectiva de publicidad incomoda a algunos de los que reciben dinero”, lo que nos trae de vuelta a lo que sucede hoy en Georgia, donde las oenegés opositoras al gobierno se oponen a una ley de transparencia que pondría sobre la mesa su financiamiento extranjero.

LA SOMBRA DE FICO Y EL MAIDÁN

¿Nos encontramos ante una ley “rusa”? Lo cierto es que el pionero en cuanto a este tipo de leyes –que intentan resguardar la propia soberanía regulando la intromisión extranjera en la política nacional– es EE. UU., donde la “Foreign Agents Registration Act” entró en vigor en 1938. Rusia también tiene una ley similar desde 2012, pero los mencionados no están solos: Hungría, Australia y Canadá tienen leyes similares y hasta la Unión Europea (UE) –que hoy se queja de la “ley rusa” georgiana– está preparando una. De hecho, Georgia basó su iniciativa legal en la formulada por la UE.

Sueño Georgiano (SG), el partido que promovió la ley que ha suscitado las protestas, tampoco es prorruso. El problema es que no es lo suficiente-

mente antirruso como para satisfacer los designios estadounidenses para la región. La aprobación de la ley en cuestión ha suscitado que SG sea acusado de alejar a Georgia de su destino europeo y occidental –el 80% de los georgianos quiere pertenecer a la UE–, insertándolo en la esfera de influencia del Kremlin. En realidad, SG, en el poder desde 2012, viene siendo el mayor promotor de la integración de Georgia a la UE, pero se ha rehusado a asumir una línea dura contra Rusia, su segundo socio comercial



Allen Weinstein, cofundador de la NED: “Mucho de lo que hacemos hoy, la CIA lo hacía hace 25 años de manera encubierta”.

LAS “REVOLUCIONES DE COLOR” –EN REALIDAD, CAMBIOS DE RÉGIMEN– SUELEN SER EL FRUTO DEL TRABAJO DE ESTA ENORME RED DE INSTITUCIONES FINANCIADAS DESDE EE. UU. Y EUROPA

más importante.

Hace unos días, el primer ministro georgiano Irakli Kobakhidze acusó a Occidente de pretender que su país se convierta en un segundo frente en la guerra contra Rusia (para “desgastar a Rusia”, como dicen claramente los planes de la Rand Corporation, al servicio del Departamento de Defensa de EE. UU.), lo que podría augurarle al pequeño país de 3.7 millones de habitantes un destino parecido al ucraniano. Ucrania se encuentra al servicio de la agenda occidental desde el golpe de Estado de Maidán (2014), en el que francotiradores asociados a los neonazis ucranianos del partido Svoboda dispararon contra sus propios manifestantes para culpar al gobierno que poco después sería depuesto (Katchanovski, 2016).

Kobakhidze también acusó al comisionado de la Unión Europea Oliver Varheli de amenazarlo. En una reciente conversación telefónica, Varheli le habría dicho –mientras mencionaba todo lo que Occidente podría hacer para detener la ley de transparencia–: “Mira lo que le pasó a Fico... hay que tener mucho cuidado”. Robert Fico es el primer ministro eslovaco que fue brutalmente baleado el pasado 15 de mayo. Varheli declaró que Kobakhidze lo había malinterpretado.

Políticos georgianos de oposición como la parlamentaria Tamar Charkviani ya habían amenazado abiertamente con una “revolución de color” si el gobierno seguía empeinado con su ley de transparencia. Las “revoluciones de color” –en realidad, cambios de régimen– suelen ser el fruto del trabajo de esta enorme red de instituciones financiadas desde EE. UU. y Europa, que movilizan a una “vibrante sociedad civil” para colocar en el poder a quienes no pudieron alcanzarlo democráticamente.

En referencia a la “Revolución Naranja”, ocurrida en 2004 en Ucrania, “The Guardian” publicó lo siguiente, revelando la mano estadounidense (26/11/04): “El Instituto Demócrata Nacional, del Partido Demócrata, así como el Instituto Republicano Internacional, del Partido Republicano, junto con el Departamento de Estado y USAID, son las principales agencias involucradas en estas campañas (políticas) de base popular, así como también Freedom House y el Open Society Institute de George Soros”.

A pesar de que los receptores de los presupuestos que antes manejaba la CIA son reacios a la publicidad y la transparencia, las “revoluciones de color”, a diferencia de las genuinas, sí son televisadas. ■

CÉSAR
HILDEBRANDT



La señora que va a Palacio

El verdadero gobierno del Perú se ejerce desde el Congreso.

El Congreso es una cueva de delincuentes y/o reaccionarios de la más baja calaña.

Nos gobiernan los forajidos que representan la economía del crimen y los intereses específicos de ciertos sectores mercantilistas, los empapelados por el Ministerio Público a raíz de delitos cometidos antes de asumir la función pública, los "niños" sobrevivientes del castillismo, los matones del prófugo Vladimir Cerrón y, por supuesto, la estirpe malhadada y macondiana del fujimorismo.

Nos gobiernan, entonces, los que perdieron las elecciones y hasta el difuntísimo aprismo se hace presente, como lo demuestra el entorno de quien fuera Fiscal de la Nación hasta hace poco.

Nos gobierna un Congreso convertido en Asamblea Constituyente espuria. Y asistimos a transformaciones de fondo inspiradas en proteger cómplices, socios y líderes de partidos que son siglas de un solo propósito: mineralizar el *statu quo*, lograr que la derecha supremacista tenga crónicas ventajas y que el modelo económico del conservadurismo se sitúe por encima de cualquier debate.

Mientras tanto, como daño colateral, el TC capturado le permite al Congreso imponer leyes que implican gastos enormes y comprometen el balance fiscal, la pobreza aumenta, la inseguridad se extiende, la educación superior se degrada y la de los colegios llega a la miseria, la salud pública se empequeñece aún más, la minería ilegal se consolida, el caos urbano parece indetenible y el 42% de los peruanos manifiesta su deseo de mudarse de país.

La señora que va a Palacio no gobierna. Ella está feliz con ser la camarera de la coalición corrompida que domina el Congreso y decide por ella. Es la Bordaberry del fujimorismo, la María Estela Martínez de Renovación

Popular, la Imelda Marcos del repulsivo señor Oскорima.

La señora que va a Palacio era la vicepresidenta y ministra de un gobierno presuntamente de izquierda. Cuando Castillo, que era la versión maligna de Platero, dio el golpe y fue defenestrado, ella debió cumplir su promesa e irse a su casa aceptando la derrota de un régimen que no hizo nada por la izquierda y que terminó por entregarle el poder a la derecha. No fue así, como sabemos. La señora que va a Palacio aceptó la propuesta del crimen y fingió que ocupaba la presidencia cuando en realidad dormía en la buhardilla que el Congreso le asignó. ¿Qué hay que tener en el alma para prestarse a ser esclava de la derecha prontuariada pudiendo haber elegido el camino del retiro digno? Hay que estar vacío. Hay que amar la poquedad. Hay que desear un Rolex (o varios), una pulsera de marca, una cara renovada a cuchilladas. Hay que ser, en suma, la hermana mayor de Nadine.

Pero si la mujer que va a Palacio no gobierna, entonces el gobierno de facto que padecemos es abiertamente ilegal. No sólo eso: además de ilícito, este gobierno golpista es socialmente ilegítimo. Lo dicen las encuestas, los insultos callejeros a quienes van a provincias como embajadores de la mujer que va a Palacio. Más del 90% de los peruanos repudia al Congreso usurpador y a la señora que va a Palacio.

Entonces, ¿por qué se sostiene esta farsa?

La respuesta es sencilla: por el miedo.

La prensa del orden, la televisión de las bolsas de aviso, los opinólogos del establecimiento, los viejos encomenderos, los directores que reclaman cuando no les contratan columnaje, los abogados del diablo, los tibios de ADN, los de la media voz, los que se acostumbraron a la calma chicha, los voceros de la parálisis, los grandes sinvergüenzas que hablan del destino de la patria, todos ellos, digo, difunden el rumor de que si esta impostura termina vendrán diluvios bíblicos y otras venganzas.

Es el Perú de casi siempre: el amable país al que un día le robaron

once naves de guerra, el que vio entre fiestones el saqueo de Echenique, el que nunca enjuició al traidor Prado, el que elevó a un payaso como Piérola a la categoría de estadista (cuando se reconcilió con el civilismo), el que toleró once años infames de Leguía, el que construyó al Odría que no usaba servilletas, el que produjo al Fujimori que renunció por fax.

Frente a ese país hegemónico, hay otro Perú que pone los muertos y las metas que no le gustan a Lima ni a los que mandan.

Me inscribo en ese otro país. Y en su nombre recuerdo que existe el artículo 46 de la Constitución vigente:

"Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas".

Me imagino que habrá planes para derogarlo. La verdad es que no es un artículo sino una profecía. ■



El prebendario ministro de Agricultura Ángel Manero junto a la señora que va a Palacio. Fue en el lanzamiento del Día Internacional de la Papa.



Un Ministerio Público fumigado



RONALD GAMARRA

Por primera vez, después de muchos años, demasiados, el Ministerio Público cuenta con una Junta de Fiscales Supremos compuesta por fiscales honestos que pueden exhibir una hoja de servicios absolutamente limpia a través de una larga carrera entregada al servicio a la institución. Esta es una gran noticia, estupenda en verdad, una novedad de un valor extraordinario que, no obstante, está pasando desapercibida en medio del cotidiano escándalo y el olor a albañal que estremece a otras entidades del Estado, como ocurre por ejemplo con el Gobierno y el Congreso.

El Ministerio Público ha ido procesando en estos últimos años una situación compleja y crítica en extremo, determinada por la presencia en su más alto organismo colectivo, la Junta de Fiscales Supremos, de fiscales corruptos y podridos, integrantes activos de redes de corrupción que alcanzan a otros ámbitos del Estado. Fue en el año 2018 que esta realidad espantosa, de cacos, quedó al descubierto con la detección de la trama mafiosa encabezada por el juez supremo César Hinostroza, el infame "juez hermanito", fugitivo e impune desde hace años en Europa.

La red de corrupción de César Hinostroza había infiltrado exitosamente el Poder Judicial, donde tenía dominio total, por ejemplo, en la Corte Superior del Callao. También controlaba a su regalado gusto el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el Ministerio Público tenía sus tentáculos, situados al más alto nivel, nada menos que en la Junta de Fiscales Supremos y en la propia Fiscalía de la Nación. La verdad es que los corruptos tenían prácticamente la mayoría en la Junta de Fiscales Supremos.

Felizmente hubo una fuerte reacción de indignación ciudadana ante el escándalo de aquella red mafiosa, cuyos contactos y negocios sucios estaban documentados en cientos de audios legalmente obtenidos, que fueron filtrados a la prensa antes de que los fiscales y jueces deshonestos se hicieran con ellos y los desaparecieran. Eso impidió que la trama corrupta realice el control de daños que hubieran podido imponer gracias al respaldo político del fujimorismo, que en ese momento detentaba la mayoría absoluta en el congreso.

En el Ministerio Público se abrió paso a una prolongada pugna entre los fiscales honrados e institucionalistas, y los fiscales involucrados en la red mafiosa de

Hinostroza. El proceso fue largo y estuvo sujeto a diversos vaivenes. La protección política del fujimorismo era poderosa. Finalmente, ese chalequeo político se hundió cuando la cueva de mayoría fujimorista fue disuelta por el Poder Ejecutivo. Entonces, se pudo avanzar en la limpieza de las manzanas podridas.

Cuatro fiscales supremos fueron destituidos y alejados definitivamente de la institución por sus nexos evidentes con la red Hinostroza. Allí se cayó entonces en una situación de precariedad y pa-

rálisis, pues solo quedaban dos fiscales supremos titulares que no permitían hacer quórum para tomar decisiones institucionales. La provisionalidad de los fiscales alcanzó así una cota sin precedentes al más alto nivel jerárquico.

Fue en esas circunstancias que se produjo el desgraciado nombramiento de la fiscal Patricia Benavides como fiscal suprema y, a continuación, como Fiscal de la Nación. Investidura funesta que impuso al Ministerio Público el imperio de una nueva red de corrupción encabe-



Patricia Benavides: el bandidaje político la necesita y confía en su retorno.

zada por la propia Fiscal de la Nación en contubernio con el poder político expresado en la mayoría congresal articulada, cuando no, por el fujimorismo.

No haré aquí la relación de hechos delictivos de la telaraña de Patricia Benavides porque ya han sido exhibidos en esta revista y son de amplio dominio público. Solo diré que la modalidad preferida era negociar apoyo político, por ejemplo votos, a cambio del archivo de investigaciones seguidas en el Ministerio Público a un número enorme de tunantes de la plaza Bolívar. Y cómo no iba a ser una mina de oro para traficar influencias si, según lo demuestra un reciente reportaje del diario *La República*, nada menos que 67 angelitos del actual congreso acumulan 729 denuncias ante la fiscalía, empezando por Alejandro Soto, su presidente.

La red corrupta de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides no contaba con que la investigación de un equipo especial de fiscales pondría al descubierto sus andanzas con pruebas contundentes a la mano, obtenidas mediante la

infiltración de un agente en la mayoría congresal. Las confesiones de Villanueva, asesor de alias Vane, son secundarias y solo confirman lo que se sabe a partir de lo registrado por el agente especial a lo largo de un seguimiento de varios meses.

Esto condujo a la suspensión provisional, por seis meses, de Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia. No obstante la contundencia y claridad de las pruebas, la red mafiosa del fujimorismo, la derecha y, de manera conspicua, el fantasmal partido aprista, se conjuraron para imponer por la fuerza el retorno de su "fiscal de la nación" al cargo del cual había sido descalificada para de allí tomar venganza.

Cuando parecía que las fuerzas mafiosas tenían todo el tablero controlado y a su favor, un pleno de la Junta Nacional de Justicia, institución maltratada en extremo por la mayoría congresal encabezada por el fujimorismo, destituyó por votación unánime, de cinco votos a cero, a la doña Patricia Benavides de los cargos de fiscal suprema y, en consecuencia, de Fiscal de la Nación. Fuera del Ministerio Público. Chau, Vane.

Con la salida de Patricia Benavides, la Junta de Fiscales Supremos queda conformada por cuatro fiscales de excelente e irreproachable trayectoria, al extremo que Willax y *Expreso* se ven obligados a inventarles calumnias tan estafalarias que ya nadie les cree. El fujimorismo y sus aliados persistirán en sus maniobras y en sus cochinadas. Qué otra cosa se puede esperar de quienes corrompieron el Estado bajo la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes entonces impusieron en el Ministerio Público el dominio infame de Blanca Nélida Colán como Fiscal de la Nación, un títere servil a sus intereses de mafia.

Por un lado, están los fogueados, los curtidos: el fiscal Pablo Sánchez, uno de los mayores conocedores del derecho procesal penal en nuestro país, un orgullo de la institución; y la fiscal Zoraida Ávalos, reivindicada por el Poder Judicial de una sanción arbitraria que le impuso el congreso aconchabado con Patricia Benavides, como ha quedado plenamente demostrado. Ambos representan la resistencia del Ministerio Público, su capacidad de resiliencia, su fuerza para rehacerse. Y junto a ellos están los más jóvenes: la fiscal suprema Delia Espinoza y el fiscal supremo Juan Carlos Villena, hoy encargado de la Fiscalía de la Nación, que encarnan la capacidad existente para que el Ministerio Público se reconstruya.

No lo pasemos por alto. Por fin tenemos un Ministerio Público encabezado por una Junta de Fiscales Supremos integrada por fiscales honrados y limpios. No podemos permitir que los atropelle un Congreso formado por decenas de delinquentes y canallas, y un Gobierno capitaneado por una presidenta que recibe coimas en joyas de lujo y que aún no responde por 49 vidas. ■

EL FUJIMORISMO Y SUS ALIADOS PERSISTIRÁN EN SUS MANIOBRAS Y EN SUS COCHINADAS

Eso se llama esquizofrenia

Entonces llega Rafael López Aliaga, el alcalde que se hace llamar Porky, a entregarnos el desprecio de su candidatura presidencial. Porque en la fantasía animada en donde vive, esa suerte de "Merrie Melodies" de la Warner Bros, los grifos no explotan destruyendo cuerdas enteras, los limeños no vivimos bajo el yugo de delincuentes y extorsionadores que en cualquier momento pedirán una suma exorbitante por tu cabeza. Nada de esto ocurre en la mente del alcalde. Al contrario, su gestión ha sido un éxito que gana todos los arbitrajes internacionales en los que se mete, ha solucionado la vida de millones y Lima es ahora una potencia mundial en donde los mototaxis vuelan.

Quizás por eso la semana pasada pidió licencia para viajar a Loreto, bien lejos de Lima y sus problemas, para hacer proselitismo político con

su partido y tomarse fotos con una pancarta que lo anuncia candidato presidencial para las elecciones de 2026. Antes había pedido el uso exclusivo de las vías del Metropolitano, arguyendo que en Lima hay mucho tráfico. ¡Ah, caramba! ¿Solucionar ese problema no era parte de su trabajo? Después se dedicó a insultar y a difamar, usando las redes sociales de la Municipalidad de Lima, solo porque algunos medios rebotaron la noticia, haciendo hincapié en la contradicción y en la desvergüenza de un alcalde que a todas luces se cree Virrey.

Nada nuevo, en realidad. Que López Aliaga insulte y ataque porque no tiene argumentos para defenderse ya es una cosa normal en el ecosistema político actual. Lo que sí resulta una novedad es el cisma político que ha sufrido Renovación Popular, partido que alguna vez fue Solidaridad Nacional y ahora

es el predio del alcalde de Lima. El viernes, mientras la ciudadanía se tragaba la noticia del lanzamiento precoz de su candidatura (que luego él mismo trató de matizar en sucesivas entrevistas), se dio a conocer la carta de renuncia al partido de tres de sus alfiles en el Congreso: los dos almirantes, Jorge Montoya y José Cueto, y Javier Padilla. En entrevista para RPP, el carismático y siempre afable Montoya admitió que esta fue motivada por el nuevo reglamento interno de la bancada que Porky quiere imponer, que traslada todo el poder político al líder del partido.

En otras palabras, Porky pretende acumular más poder porque, según este, tiene posibilidades de ceñirse la banda presidencial en 2026. Claro que, para ello, va a tener que dejar botada su gestión municipal para hacer campaña. Ya lo hizo el 22 y 23 de mayo para viajar a Iquitos, previa



PEDRO CASUSOL

autorización del Consejo Municipal, dejando en el cargo a Renzo Reggiardo. Recordemos que, en campaña, López Aliaga juró y perjuró que no iba a dimitir, que completaría su gestión y que sería otro el candidato de Renovación Popular para las elecciones 2026. Pero, vistas sus últimas movidas, está bastante claro que esa promesa correrá el mismo destino que las motos, las ollas comunes, las playas artificiales, la solución del transporte, los peajes...

Supongo que todos estos compromisos se han hecho realidad en Porkylandia, la fantasía en la que vive López Aliaga, la realidad paralela a la que se refieren ciertos conductores de Willax que hablan de un candidato de "cualidades extraordinarias" para referirse al alcalde. "Un hombre que ha hecho muchísimo dinero", dicen embobados, como si hacer millones en la época de Fujimori, teniendo la concesión del tren a Machu Picchu, hubiera sido muy difícil. Todos sabemos que el hombre del cilicio tiene graves problemas para entender la realidad, que vive obsesionado con Odebrecht y con ese ente difuso al que llama "caviar". Pero pensar que tras el desastre que ha sido su gestión municipal tiene posibilidades de convertirse en presidente... Eso se llama esquizofrenia. ■

Valores occidentales

Desde el gobierno del expresidente norteamericano George W. Bush oímos hablar del "eje del mal". Se trata de una típica división maniquea de la geopolítica mundial. Una división entre "buenos" y "malos", donde, por supuesto, los buenos son, en primer lugar, quien formula esta doctrina (EE.UU.) y luego todos sus aliados.

En el momento actual, el "eje del mal" estaría conformado por Rusia, Corea del Norte, Irán y todos sus proxys (Hamás entre ellos), Venezuela, en cierta medida China, etc. Los "malos" son, como puede observarse en esta lista, todos aquellos gobiernos o movimientos políticos enemigos de EE.UU. o de sus aliados.

Esta lucha entre el bien y el mal suele plantearse también como una

pugna entre los valores occidentales y quienes los niegan. En otras palabras, entre quienes defienden el régimen democrático, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, y quienes instauran dictaduras, actúan al margen del derecho internacional y vulneran los derechos humanos.

Es preciso desmontar esta visión maniquea, simplista y propagandística. Pero ello no implica, por supuesto, defender a los regímenes y grupos que conforman el denominado "eje del mal". Muchas de las acusaciones que se vierten sobre ellos son ciertas. Las libertades y los derechos fundamentales suelen estar coartados en sus países.

Criticar la visión simplificadora tampoco implica negar la importancia de los valores que suelen ser identificados como occidentales.

Sin embargo, no debemos caer en el error, inducido por la propaganda, de asociar automáticamente aquellos valores con el comportamiento real de las potencias occidentales en el ámbito internacional.

EE.UU., supuestamente encarnación suprema de esos valores, invadió Irak en 2003, violando el derecho internacional, sin permiso del Consejo de Seguridad, en ausencia del derecho a la legítima defensa y con pretextos falsos. Lo apoyaron la España de José María Aznar y el Reino Unido de Tony Blair. Como nuevos cruzados de un "eje del bien".

Podemos imaginar que para todos los iraquíes que padecieron la invasión y las secuelas de la misma, los alegatos de los tres países invocando valores occidentales les sonarán a palabras vacías, cuando no a una franca y criminal hipocresía.



RODOLFO SÁNCHEZ-AIZCORBE

Un estudio de 2006 de la revista *The Lancet* estimó en más de 600 mil los muertos por la guerra y sus efectos.

Actualmente los gazatíes observan cómo sus familiares, incluidos niños, mujeres y ancianos, mueren a diario en bombardeos indiscriminados, mientras dos sucesivos fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son incumplidos por Israel. A pesar de que los mismos son vinculantes, hasta ahora ni una sola potencia del occidente "civilizado" aplica sanciones.

Son las mismas potencias que presurosas le quitaron el financiamiento a la Agencia para los Refugiados de Palestina (UNRWA) —justo cuando un primer fallo de la CIJ clamaba por más ayuda humanitaria— por la sola acusación israelí de que algunos de sus miembros habrían participado en el atentado del 7 de octubre. Hasta ahora Israel no presenta pruebas.

Es justo, legítimo y necesario defender los valores considerados occidentales (aunque quizás es mejor denominarlos universalistas) de democracia, derecho internacional y derechos humanos. Pero también es imprescindible defenderlos frente a las acciones u omisiones de las propias potencias occidentales. ■

Minería extranjera que no industrializa



PEDRO FRANCKE

El gobierno y los neoliberales insisten en imponer proyectos mineros repudiados por la población local debido a sus negativos impactos ambientales, como Tía María y Conga. Olvidan que hace falta un nuevo esquema de gobernanza de la minería, en el cual se respete la democracia y el derecho de las regiones y provincias a decidir su camino al desarrollo en armonía con el ambiente y la agricultura. Hay otro tema esencial que tampoco abordan: el enorme crecimiento de la minería este milenio ha dejado mucho que desear en cuanto a su aporte al desarrollo industrial y tecnológico nacional.

MINERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN

Hasta los años setenta el crecimiento de la minería peruana estuvo asociado a la industria de refinación y fundición de los metales. Pero en los últimos cuarenta años prácticamente no ha habido avances en el procesamiento de los minerales. Lo que ha habido son retrocesos, a pesar de que la producción minera se ha multiplicado. La mayor parte del mineral que sale del Perú es como concentrado, sin mayor procesamiento. Mientras menos industria tenemos, perdemos la oportunidad de generar empleos, progresar tecnológicamente y añadir valor a nuestras exportaciones.

No parece ser por gusto que las transnacionales mineras no quieran refinar en el Perú. Hace unas semanas, Cooperación, una institución sin fines de lucro que ha estudiado la minería a lo largo de décadas, sacó un informe sobre los nuevos minerales estratégicos que salen del país sin que tengamos registro. Hablamos de elementos conocidos como 'tierras raras': cobalto, telurio, vanadio, galio, indio, entre otros. Esos materiales raros han adquirido gran valor con las nuevas tecnologías que se han desarrollado en el mundo, pero en especial aquellas para captar energía solar y almacenarla. En el Perú estas "tierras raras" se encuentran mezcladas junto al cobre y otros metales que se extraen en nuestro país. Pero ni siquiera sabemos cuánto de ellas se obtiene ni cuánto vale. Lo que sucede es que sólo en el proceso de refinación o fundición se puede separar estos elementos raros que hay en un concentrado.

El estudio de Cooperación revela que hay por lo menos 34 especies químicas, pero el ministerio de minas sólo sabe de 12. Es decir, el ministro Mucho, tan activo cuando se trata de defender los intereses de las grandes mineras, ignora

dos terceras partes de los elementos de gran valor presentes en los concentrados que se exportan. La refinación se hace en otras partes, como en China, para las grandes empresas mineras estatales de ese país que operan en el Perú, o en Alemania, donde hay una fundición privada que saca estos materiales raros y ni nos enteramos. Es probable que el valor de los concentrados que exportamos valga mucho más de lo que declaran las empresas, pero a las transnacionales les conviene no declarar esos materiales raros porque así evaden impuestos. Por ejemplo, Cooperación revisó algunos registros aduaneros de las ventas de cobre y resultó que las transnacionales declaran que venden el cobre a precios menores que el internacional, a pesar de que muchos concentrados tienen plata,

molibdeno y otros materiales de alto valor. Una estimación indica que sólo en telurio habría unos 30 millones de soles ocultos.

En Indonesia han aplicado una política muy distinta. Para que la refinación se haga en su país, Indonesia ha ido añadiendo prohibiciones a la exportación de minerales en bruto, como níquel y bauxita, que ahora exige se procesen en su territorio. El resultado es que hoy ya tienen más de veinticinco plantas de procesamiento de níquel y se están construyendo otras tantas. Chile también ha tomado medidas para promover la industrialización a partir del procesamiento de sus recursos mineros en base al litio, un metal que sirve para hacer baterías de alta carga y sostener así la transición energética. El cobre, nuestro principal



Minería a la peruana: deja mucho que desear en cuanto al desarrollo industrial y tecnológico.

producto de exportación, es también clave en la transición energética. ¿No podemos en el Perú aprovecharlo ni un poquito para industrializarnos, siempre teniendo cuidado con el ambiente, como corresponde?

Otros países mineros como Australia y Chile han avanzado en industrialización apelando al sector de proveedores mineros, que son todos aquellos dedicados a venderle a la minería botas y equipos de seguridad personal, explosivos, insumos diversos para las chancadoras y maquinarias. En el Perú hay algunas industrias en este rubro, con ventas internacionales incluso de maquinaria pesada, pero las transnacionales mineras que operan acá prefieren comprar al exterior. Podríamos aprovechar mucho más esta oportunidad generada por los insumos y equipos que requiere la minería. En este tema en el MEF instalamos una Mesa Ejecutiva para promover medidas que favorezcan a la industria minera, iniciativa lamentable-

mente dejada de lado. Debemos insistir en que las grandes empresas mineras apoyen los esfuerzos para industrializar el país.

¿LA BATUTA A LAS TRANSNACIONALES?

Otra decisión llamativa de Indonesia es que el 2017 establecieron límites a la propiedad extranjera de las empresas mineras: a partir de su sexto año de operación la propiedad extranjera en una minera no puede superar el 80 % y este límite disminuye cada año hasta alcanzar el 49 % en el décimo año. Estas medidas, que podríamos llamar "nacionalistas", no han generado ningún desastre ni calamidad como dirían los neoliberales. Indonesia ha venido creciendo al 5 por ciento anual de manera sostenida, sin el declive productivo que ahora tiene el Perú. Ojo que no estamos hablando de un país pequeño o de poca importancia. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo con 270 millones de personas, su PBI es casi diez veces mayor que el del Perú y es un gran productor de recursos naturales. Tampoco es para nada cercano al socialismo, ya que incluso forma parte del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, cuyo impulso inicial provino de los Estados Unidos.

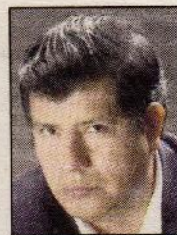
Los países asiáticos que han logrado mayor avance en los últimos años han abrazado la inversión extranjera pero también han buscado que sus empresas nacionales florezcan. Empezó Japón y logró tener marcas de automóviles y electrónicos conocidas internacionalmente, luego siguieron Taiwán, Corea del Sur y China y ahora vienen creciendo fuertemente Vietnam, India y Bangladesh. Indonesia sigue esta estrategia pero basándose en sus recursos naturales. Mientras tanto, en nuestro país las principales inversiones para extraer las riquezas de nuestra tierra son totalmente extranjeras.

Quellaveco: 100% americana. Las Bambas: 100% del estado chino. Antamina: 100% de transnacionales. Es cierto que hay algunos grupos peruanos en la minería también, pero ¿por qué no promover que la minería contrate más profesionales peruanos de todo nivel, se vincule más a las universidades peruanas y nos transfieran su tecnología para progresar?

Hay mucho más por discutir sobre la minería: los derechos laborales que deben tener sus trabajadores y que hoy resultan negados por la tercerización, su aporte tributario ahora que nuevamente tienen sobreganancias con los precios del cobre a niveles estratosféricos, la necesidad de que no contaminen nuestra agua como amenaza el proyecto Ariana a Lima, su gobernanza con democracia y respeto a los derechos humanos. Los iremos tratando los próximos meses. Vayamos insistiendo en políticas para que el Perú se industrialice y avance tecnológicamente. ■

PARA QUE LA REFINACIÓN SE HAGA EN SU PAÍS, INDONESIA HA IDO AÑADIENDO PROHIBICIONES A LA EXPORTACIÓN DE MINERALES EN BRUTO, COMO NÍQUEL Y BAUXITA, QUE AHORA EXIGE SE PROCESEN EN SU TERRITORIO

Los 57 de "Cien años de soledad"



PACO MORENO

Hasta ahora me da bronca que los hijos de Gabriel García Márquez hayan publicado la novela. En agosto nos vemos pensando solo en las jugosas ventas de ejemplares. En la misma ruta del dinero, los hijos encendieron la luz verde para que Netflix llevara a las pantallas *Cien años de soledad*, esa alegoría de los avatares de América Latina que el 30 de mayo cumplió 57 años de publicada por la editorial Sudamericana de la Argentina.

García Márquez entendía muy bien el lenguaje audiovisual, tanto que llegó a ser presidente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano e impartía talleres de escritura de guiones en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de la ciudad cubana de San Antonio de los Baños.

En una de las calurosas sesiones del taller, García Márquez preguntó: "¿Saben ustedes por qué no permito que *Cien años de soledad* se lleve al cine?", y respondió: "Porque quiero respetar la inventiva del lector, su soberano derecho a imaginar la cara de la tía Úrsula o del coronel como le venga en gana".

En aquella clase explicó que el lector de novelas se imagina las cosas como quiere (rostros, ambientes, paisajes), mientras que el espectador de cine o el televidente no tiene más remedio que aceptar la imagen que le muestra la pantalla, en un tipo de comunicación tan impositiva que no deja margen a las opciones personales.

Sin embargo, a pesar de la negativa del padre, los hijos siguen pensando con el bolsillo y van hacia delante sacándole el jugo a la novela y tratando de justificarse con el asunto de que toda historia puede presentarse en todos los formatos.

Lo que pasa es que *Cien años de soledad* vende. Es un verdadero clásico en el sentido de Jorge Luis Borges, para quien clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos, sino "un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad".

Francisco Porrúa, ejecutivo de la editorial Sudamericana, fue uno de los primeros en leer la novela, pero no desde la primera página sino desde la mitad hacia el final porque García Márquez y su esposa Mercedes enviaron, desde México hacia la Argentina, la segunda parte del libro, dividido en dos por falta de dinero para pagar el transporte íntegro.

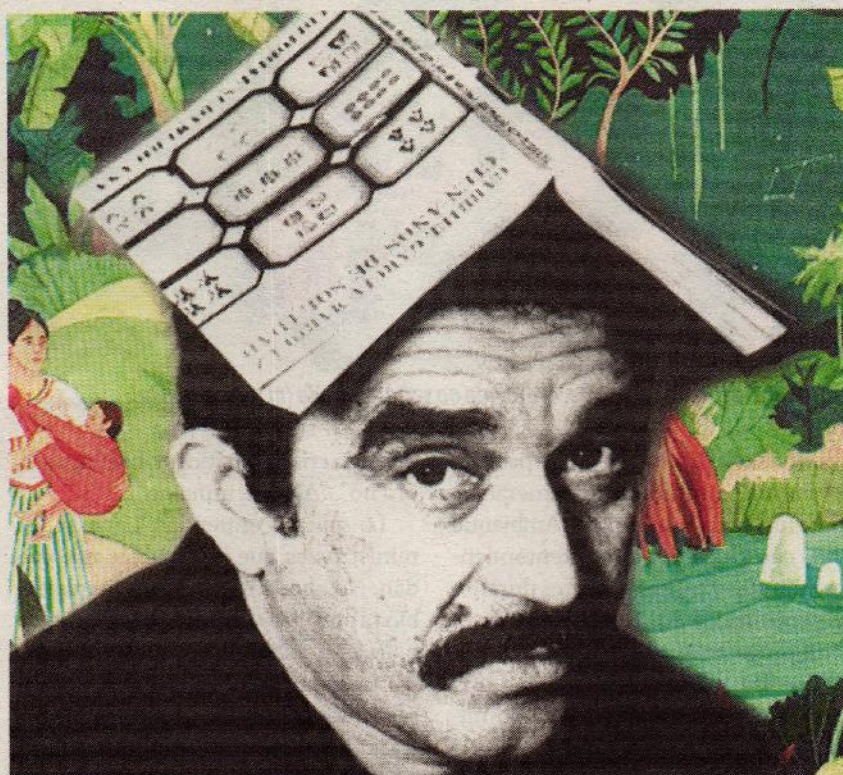
Porrúa tuvo que enviar dinero por la

otra mitad de la novela al matrimonio que había quedado en México huérfano de monedas, con deudas abultadas y sus cosas empeñadas para sacar adelante el proyecto del genio colombiano. Una de las pocas cosas que quedó sin empeñar fue el artefacto calentador porque era imposible que García Márquez pudiera escribir perturbado por el frío.

El tiraje de la primera edición fue de ocho mil ejemplares, que se vendieron en apenas quince días solo en la ciudad de Buenos Aires. Así empezó el mito que

había comenzado hacía 18 meses, cuando García Márquez, con 38 años, cuatro libros publicados desde los 20, se había sentado a escribir: "Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo".

García Márquez le contó a Plinio Apuleyo Mendoza que había intentado escribir el libro a los 18 años y que iba a titularlo *La casa*, pero que, por falta de pericia en lo que García Márquez



Gabriel García Márquez: pasaron sobre su cadáver para hacer el engendro de Netflix.

llamaba "la carpintería de la escritura", el proyecto quedó dándole vueltas en la cabeza durante 15 años, tiempo en el que salieron publicadas algunas escenas a manera de adelanto de la historia monumental.

Para García Márquez, toda buena novela es una transposición poética de la realidad y una suerte de adivinanza cifrada del mundo. García Márquez es un poeta cuya máxima virtud es contar historias. Es como Juan Rulfo, pero excesivo, exuberante con sus camisas floreadas, profuso como un baile de vallenato de tres días.

Cien años de soledad empezó a germinar porque García Márquez quería "dejar una constancia poética del mundo de su infancia, que transcurrió en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la

demencia". En la realidad, por ejemplo, fue el abuelo materno Nicolás Ricardo Márquez Mejía, quien llevó a conocer el hielo a aquel niño prodigio que absorbía los detalles más insólitos de su infancia.

Antes de que se publicara, García Márquez sabía que el libro recibiría buena crítica, pero no pensó que él se convertiría en un escritor superventas, considerando lo ocurrido con sus cuatro libros anteriores: unos mil ejemplares vendidos por cada libro. Lo que empezó con ocho mil ejemplares escaló a más de 40 millones editados en más de 40 idiomas diferentes, y esta cifra sigue creciendo.

García Márquez se conmovió cuando en el año 2007 en Cartagena de Indias le entregaron el primer libro de la edición de un millón de ejemplares lanzada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. García Márquez cumplía entonces ochenta años y ya lo había dado todo. Había sorprendido hasta a los lectores más exigentes.

Por una ceguera que aumentaba, Jorge Luis Borges dejó de leer en 1955, de modo que conoció la obra de García Márquez gracias a la lectura de amigos que lo visitaban. Regreso a Borges en esta nota porque era un argentino que no regalaba elogios. Sin embargo, en aquella famosa entrevista que César Hildebrandt le hizo en diciembre de 1978, Borges dijo que García Márquez es un gran escritor, "aunque creo que el principio de *Cien años de soledad* es mejor que el final. Pero es normal. Al final, el autor se cansa".

En 1978 brillaban ya Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, pero Borges no había leído al primero o no le interesó leerlo en serio, y de Cortázar decía que se había perdido en juegos formales; pero habló bien del hijo predilecto de Aracataca. Cuando otro periodista le preguntó a Borges si había leído a García Márquez, contestó: "Si he leído *Cien años de soledad*, uno de los grandes libros no solo de nuestro tiempo sino de cualquier tiempo".

Nadie sabe qué hubiera dicho Borges sobre *El amor en los tiempos del cólera*. Cierta vez, García Márquez sostuvo que su libro no es *Cien años de soledad*, sino *El amor en los tiempos del cólera*. "Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico, y yo no trato de disputarle ningún mérito; pero *El amor en los tiempos del cólera* es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad".

Víctor Hurtado Oviedo escribió que los libros son como los hijos: deben defenderse solos. Vence solo *Cien años de soledad* y sigue sorprendiendo al tiempo —en realidad, el editor más exigente—. Una de las razones quizá sea que el padre costeño, tímido, tierno y genial, nunca aceptó vender su opinión a las corporaciones, que, si pudieran, le pondrían alto precio al aire. ■

**GARCÍA MÁRQUEZ LE
CONTÓ A PLINIO APULEYO
MENDOZA QUE HABÍA
INTENTADO ESCRIBIR EL
LIBRO A LOS 18 AÑOS Y
QUE IBA A TITULARLO LA
CASA**

La tía Lima



YBRAHIM LUNA

Ejecutivo peruano para evaluar el EIA del proyecto Tía María, halló serias irregularidades e hizo 138 observaciones, 3 de ellas de gravedad.

Entre las protestas de 2011 y 2015 contra Tía María murieron siete civiles y un policía. Todos los civiles cayeron por disparos de armas de las fuerzas del orden. Jamás se identificó a algún culpable.

En las protestas del 2015, un efectivo policial, cuya identidad falsa bordada en el uniforme era "Filosofexxx", sembró un arma al poblador Antonio Coasaca para luego presentarlo como un delincuente. Afortunadamente un video reveló la verdad, pero nunca se conoció la identidad del mal efectivo o si recibió sanción alguna.

También en 2015 el entonces presidente de Southern, Óscar González Rocha, se libró de la cárcel por la contaminación que su empresa produjo en aire y agua en la provincia de Ilo, Moquegua, porque el juez que vio el caso aceptó una acción de amparo y congeló el proceso arguyendo que "al tratarse de una persona de la tercera edad debe tener calidad de vida".

En mayo de 2018 en un evento minero, Carlos Aranda, gerente de Servicios Técnicos de Southern, concluyó que los pobladores del distrito de Deán Valdivia en la provincia de Ilay que se oponían al proyecto Tía María tenían una genética singular: "¿Ustedes saben que Deán Valdivia es

la cuna de Abimael Guzmán? Pues creo que hay algo genético ahí. Es cierto que Deán Valdivia es más recalcitrante (...) Y creo que es un tema muy de ellos. Es más, cuando uno pasa cerca de la casa de Abimael Guzmán, la tienen perfecta, bien pintada, limpiecita..."

Por su parte el Grupo México (la matriz de Southern) tuvo procesos por casos de contaminación ambiental como los derrames de sulfatos de cobre acidulado en 2014 en los ríos Bacanuchi y Sonora, en México. Fueron los derrames más grandes registrados en ese país.

"Dignidad regional" es recordar y oponerse a todo esto. ■

Desde la suspensión del proyecto minero Conga (Cajamarca) en 2011 y la paralización del proyecto Tía María (Arequipa) por protestas en 2011, 2015 y 2019, decenas de ministros han desfilado por el Ejecutivo prometiendo sendos destrabes con el fin de ganarse los aplausos de la derecha política, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y algunos medios de comunicación. Pero nadie hasta ahora, como lo ha hecho el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, había insistido tanto en alborotar el avisero.

Vayamos por orden.

El 22 de mayo el portal "Forbes Perú" anunció que el proyecto Tía María tenía por fin fecha de inicio para su construcción, la que sería entre finales de 2024 e inicios de 2025, reseñando las declaraciones que Raúl Jacobs, vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, dio a la agencia Reuters. De inmediato el Grupo México, la matriz, emitió un comunicado aclarando que la construcción de su proyecto en Perú "empezará en el momento que se considere más adecuado, pues no tiene fecha determinada".

El 27 de mayo el portal "Rumbo Minero" destacó las declaraciones que el ministro Mucho dio para "Canal N", donde aseguró que "hay población que se opone al proyecto. Su posición se respeta. Pero no va a cambiar. A la luz de la realidad, el Estado debe intervenir en el Valle El Tambo". Para luego agregar que la "intervención" sería multisectorial y con todos los ministerios. Hablar de "intervención del Estado" luego de las

masacres de Huamanga y Juliaca no es un guiño muy inteligente que digamos.

Los dirigentes de Deán Valdivia, Cochacra y Punta de Bombón ya han hecho sentir su voz de protesta. En conversación con Wayka.pe (27/mayo/2024) el dirigente del Valle El Tambo, Miguel Meza, declaró que la empresa no tiene

diversos factores críticos y las taras que arrastramos desde hace doscientos años: desde la nula presencia del Estado hasta la imposición de un modelo primario-exportador, pasando por el racismo y la constitución de una política rondera y agrícola. Sumado a esto, fue notorio el desarrollo de una consciencia ambiental



Agricultores del Valle del Tambo: el acuerdo no se ha realizado (ni remotamente).

"licencia social" y que el rechazo persiste por los malos antecedentes generados, como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) cuestionado y los enfrentamientos, muertes y procesamientos durante las protestas de 2011, 2015 y 2019.

El proyecto aurífero Conga y el cuprífero Tía María (cada uno con una inversión estimada de US\$ 1,400 millones) no están congelados porque las empresas no sepan comunicar las bondades de la minería moderna a los peruanos "ignorantes" y "violentos". Están paralizados porque se convirtieron en conflictos sociales síntesis, donde confluyeron, chocaron y colapsaron

en plena crisis climática global: "Agua sí, oro no", "Agro sí, mina no".

Lo que no entienden Lima ni los ministros es que los pueblos no olvidan. No olvidan que el Estado que debió protegerlos les envió batallones de policías y militares y mató a su gente para resguardar los intereses de empresas transnacionales, porque de eso se trata "el milagro peruano": hacer contratos-ley sagrados para vender cerros y esperar que el chorreo de los impuestos nos saque de la pobreza.

Entre 2010 y 2011 la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), contratada por el

«El día que me quieras»

«El día que me quieras» es el título de un famoso tango escrito por Alfredo Le Pera, en los años treinta del siglo pasado: «El día que me quieras / la rosa que engalana / se vestirá de fiesta / con su mejor color. / Al viento las campanas / dirán que ya eres mía / y locas las fontanas / me contarán tu amor». La belleza de esta canción inmortalizada por Carlos Gardel está fuera de toda discusión, pero, en el terreno del empleo del idioma, surge la duda de si la forma correcta es «el día que» o, más bien, «el día en que».

Al respecto, la Fundéu indica que cuando el pronombre «que» desempeña la función de complemento de tiempo puede llevar o no la preposición «en».



RICARDO VERA LEYVA

Por tanto, el título del tango es válido y también son correctas las frases «el día que Perú dio un baile a Chile...» (o «el día en que Perú dio un baile a Chile...») y «el día que Marito apoyó a Keiko...». Los siguientes versos de Vallejo resultan, asimismo, irreprochables: «Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo. / Todos saben que vivo, que soy malo; y no saben / del diciembre de ese enero. / Pues yo nací un día / que Dios estuvo enfermo».

Pasemos a otro asunto. Con mu-

cha frecuencia escuchamos preguntas como «¿Tienes algo en mente para esta noche?», «¿Qué tienes en mente para celebrar el Año Nuevo?» o «¿Lograste hacer lo que tenías en mente?». Quienes las plantean desean saber —es obvio— si sus interlocutores planificaron algo o concretaron lo que habían previsto. Lamentablemente, desconocen que la forma apropiada es «tener algo en la mente», con el artículo «la», y no «tener algo en mente». Es muy probable que el

error se haya originado por influjo de la locución latina «in mente» ('en la mente' o 'mentalmente').

Para terminar, nos referiremos a una interrogante muy común: ¿debe decirse «hasta el punto que» o «hasta el punto de que»? Según el «Diccionario panhispánico de dudas» («DPD»), solo es válida la segunda construcción; la primera constituye, en realidad, un caso de queísmo. Se impone, entonces, dejar de escribir «Durante marzo puede haber días calurosos, hasta el punto que se puede experimentar una ola de calor» (lanacion.com.ar, 21/3/2024) y «(...) los otros frentes se muestran bastante inactivos, hasta el punto que en las últimas 24 horas no han sonado las sirenas en ningún punto de Israel» (radiosefarad.com, 8/2/2024). ■

Netanyahu podría terminar preso



ISAAC BIGIO

El 20 de mayo, Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), ordenó arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad. Washington y Londres condenaron furiosamente dicho dictamen. Debido a que la megapotencia blindó al gobernante sionista, muchos dudan que él alguna vez acabe bajo rejas. Trataremos de demostrar que hay más probabilidades de que Netanyahu termine preso a que siga mucho tiempo libre.

Khan declaró que le han advertido que esta corte fue "construida para África y matones como Putin". Tanto él como su predecesora en el cargo, Fatou Bensouda, han sido alertados de que ellos (o sus allegados) podrían ser víctimas de operaciones encubiertas. La CPI ha recibido muy fuertes amenazas por parte de EE.UU.

Hasta hoy, todos los antiguos gobernantes y líderes políticos y militares que han sido sancionados o condenados por la CPI fueron "indeseables" o adversarios para EE.UU. Esta es la primera vez que se demanda la encarcelación de un mandatario de un país tan cercano a Norteamérica. Israel, además, es el país que más ayuda militar-financiera ha recibido por parte de EE.UU. en el último medio siglo.

Bajo las cláusulas del Tratado de Roma de 1998 que dieran paso a la CPI en 2002, todos sus actuales 128 países signatarios están obligados a apresar a cualquiera de las personas que estén en su lista de requeridos. Alemania, que es después de EE.UU. la potencia que más arma a Israel, estaría obligada a enjear a Netanyahu si pisara su territorio, algo que también debieran hacer los británicos, pese a que ellos fueron los que impulsaron la construcción de un "hogar nacional judío" cuando establecieron su mandato

sobre Palestina entre 1920 y 1948.

Sin embargo, ni EE.UU. ni Israel ni un tercio de Naciones Unidas son parte de dicho acuerdo. Netanyahu cree que él podría estar a salvo siempre y cuando no deje su país. Vladimir Putin no fue a la cumbre de los BRICS 2023 en Sudáfrica, pues esta república le advirtió que eso era lo

mejor para sus intereses. Putin acabó de ser reelecto con 88.48% en las elecciones presidenciales rusas de marzo y tiene un nuevo sexenio más en el poder.

En cambio, Israel tiene un territorio casi mil veces menor que el de Rusia. Netanyahu es tan impopular en casa que, según toda encuesta,



Benjamín Netanyahu: la derrota de los conservadores en Reino Unido, inexorable según las encuestas, cambia el escenario internacional.

perdería la mitad de su bancada (y también el gobierno) si se dieran las elecciones generales anticipadas reclamadas por buena parte de la población.

Netanyahu no puede moverse fuera de su pequeño país ni del Medio Oriente o Europa (de donde procede el grueso de su población hebrea). Podría ir a EE.UU. (donde su congreso quisiera invitarlo para solidarizarse con él, pero arriesgando generar grandes protestas y un golpe a la posibilidad de que Joe Biden pueda ser reelecto).

Hay quienes argumentan que Washington y Londres siempre protegerán a Netanyahu. No obstante, un primer cambio puede pasar el 4 de julio, cuando se darán las elecciones generales británicas, en las cuales, según los sondeos, la oposición laborista duplica en intenciones de votos al gobernante del conservadurismo. Si se confirma el triunfo "rojo", su nuevo ministro de relaciones exteriores será David Lammy (la primera persona de color y padres sudamericanos en ocupar tal

cartera), quien ya ha dicho que él apoya lo hecho por la CPI.

Quienes dudan de que Netanyahu pudiese ser apresado argumentan que Israel es uno de los países que más ha desconocido tratados internacionales. Desde su fundación el 15 de mayo de 1948, Israel ha violado numerosas resoluciones de Naciones Unidas. En dicho año no permitió la creación de un Estado palestino y luego se opuso a implementar la resolución 194 según la cual los nativos palestinos tenían derecho a retornar a sus tierras ancestrales. David Ben-Gurión, primer ministro israelí, sostuvo entonces: "Ellos perdieron y se fueron. Su retorno debe ser prevenido por

lo que voy a oponerme a su regreso incluso después de la guerra".

En 1992 el entonces primer ministro israelí, Isaac Shamir, vetó el retorno de cualquier refugiado palestino. "Esto nunca va a pasar en ninguna vía, forma o dimensión. Solo existe el derecho de los judíos a retornar a la tierra de Israel", dijo Shamir. Cualquier persona que se haya convertido al judaísmo, aunque no tuviese ancestros semitas, pueden recibir facilidades, educación y salud gratuitas si emigran a Israel, pero todos los nativos (la mayor parte

con el mismo ADN de los antiguos israelitas) carece de tal derecho.

Shamir fue uno de los líderes de la banda armada Stern, la cual asesinó en septiembre de 1948 al conde sueco Folke Bernadotte, quien salvó a miles de cautivos en campos de concentración nazis y luego fue electo unánimemente por Naciones Unidas como mediador en el conflicto palestino-israelí. Stern lo mató porque se atrevió a demandar el derecho de los desplazados palestinos a regresar a sus pueblos ancestrales.

La lista de transgresiones israelíes es larguísima y continúa hasta hoy, cuando Tel Aviv no ha hecho caso a las advertencias de la Corte Internacional de Justicia de evitar acciones genocidas. A poco de que el viernes 24 de mayo esta le conminase a detener su ofensiva en Rafah, sus tropas quemaron vivas a decenas de gazatíes, mientras que persisten en querer tomar esta urbe produciendo mayores matanzas de civiles.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

ALEMANIA, QUE ES DESPUÉS DE EE.UU. LA POTENCIA QUE MÁS ARMA A ISRAEL, ESTARÍA OBLIGADA A ENJEAR A NETANYAHU SI PISARA SU TERRITORIO

El genocidio palestino continúa. Mientras el ejército israelí lanza bombas *made in USA* para arrasarlo con lo que queda de Gaza, la administración Netanyahu prosigue con los "crímenes selectivos" en Cisjordania. Desde el 7 de octubre 520 palestinos han sido asesinados en Cisjordania. De ellos, 60 eran menores de edad. Naciones Unidas advirtió que la situación es insostenible. Y Netanyahu, sabiéndose impune, respondió que seguirán con la matanza hasta final de año.

Uno de los últimos ataques del ejército de Israel en Cisjordania fue contra el campo de refugiados en Jenín administrado por la UNRWA, la organización de Naciones Unidas. Ocurrió el martes 21 de mayo.

Durante la madrugada, la "Brigada de Jenín", un grupo local de resistencia armada, abrió fuego contra un escuadrón del ejército de Israel que intentaba infiltrarse en el campamento. En cuestión de minutos llegaron refuerzos de soldados, camionetas militares blindadas y buldóceres.

La arremetida duró días. Dispararon contra civiles y periodistas, arrasaron con las pistas, bombardearon más de 10 viviendas, destruyeron el sistema de agua potable y alcantarillado, y se instalaron en el puesto de salud durante 72 horas. El ejército israelí impidió la entrada a las ambulancias que llegaban con los heridos.

Una de las víctimas, Mahmoud Hamadna, de 15 años, estaba en el colegio cuando el director, debido al asedio, suspendió las clases. El adolescente tomó su bicicleta para regresar a casa y mientras pedaleaba un soldado israelí le disparó en la cabeza, el corazón y el abdomen. Las balas eran explosivas.

Ese mismo día fue asesinado Allam Jaradat, profesor de secundaria de 48 años, cuando iba camino al trabajo. El Dr. Osayd Kamel Jabareen, director del departamento quirúrgico del Hospital Gubernamental de Jenín, cayó abatido en las inmediaciones de su centro de trabajo. Wassim Jaradat, otro adolescente de 15 años que había logrado sobrevivir a los disparos de un soldado israelí hace unos meses, esta



Mahmoud Hamadna, palestino de 15 años, pedaleaba en su bicicleta el 21 de mayo cuando un soldado israelí lo mató a balazos. (Foto de abajo).



También en Cisjordania

► Israel no sólo extermina palestinos en Gaza. Lo hace, de modo sistemático, en el territorio ocupado desde la guerra de 1967

vez no tuvo la misma suerte.

Desde el año pasado, en Cisjordania, explica la responsable de comunicaciones

de la UNRWA España, Irene Martínez, ocurren en promedio 22 ataques al día contra ciudadanos palestinos y con-

tra la infraestructura civil. Los objetivos de estas arremetidas suelen ser, además de los campos de refugiados, tierras de

cultivo, olivos, viviendas particulares, mercados, mezquitas e iglesias, convoyes humanitarios y las escuelas.

El centro escolar de secundaria Urif, al sur de la ciudad de Nablus, es un objetivo habitual de este asedio. "Cada mañana, antes de que lleguen los niños, tenemos que buscar explosivos alrededor del colegio", narró el vicedirector Mazin Shehadeh en una entrevista con la publicación árabe-estadounidense "Al-Monitor".

En las últimas semanas las embestidas se han extendido a las horas de clase. Explica Shehadeh que los colonos israelíes, protegidos por escuadrones del ejército, les han lanzado piedras y gas lacri-



Víctimas del bombardeo israelí a las tiendas de campaña de refugiados en Rafah. Se encontraban en el patio de un edificio de la UNRWA.



Allam Jaradat (48), profesor asesinado por las fuerzas israelíes en Jenin, Cisjordania, cuando iba de camino al trabajo el 21 de mayo de 2024. (Foto: Reuters/Ali Sawafta).



Una de las sobrevivientes del bombardeo del martes 28 de mayo a las tiendas de campaña de refugiados en Rafah. (Foto: @mohammed_farq).

mógeno, le prendieron fuego a su oficina y dispararon granadas de aturdimiento contra los estudiantes. “Muchos de nuestros alumnos, brillantes y trabajadores, han dejado de asistir por miedo a los ataques”, denunció Shehadeh.

“En Cisjordania no hay un conflicto armado, pero el ejército de Israel se comporta como si lo hubiese. Están utilizando cantidades masivas de soldados, drones, aviones de combate y bombardeos, misiles y otras armas pesadas”, denunció Ajith Sunghay, director regional palestino de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU,

el pasado 8 de mayo.

“La gente no puede moverse entre los pueblos, comunidades y ciudades dentro de Cisjordania (...). Los ataques de colonos ahora son mucho más organizados y participan comunidades enteras. Los ataques son, además, mucho más frecuentes y violentos”, explica Sunghay.

En Jerusalén, la noche del pasado domingo 26, un grupo de colonos irrumpió dentro de la mezquita Al-Aqsa, el principal centro de culto para los musulmanes palestinos. Y bajo protección de la policía israelí, celebraron rituales judíos del Talmud. Se trata de un acto de

absoluta provocación porque los palestinos tienen prohibido ingresar a su mezquita desde octubre. Y el último miércoles, de madrugada, el ejército prendió fuego y destruyó el mercado palestino de frutas y verduras de Ramallah.

“El objetivo es consolidar la reocupación de toda Cisjordania, de toda Palestina”, explica el doctor Mustafa Barghouti, exministro de salud y secretario general del partido político “Iniciativa Nacional Palestina”.

“¡Pero esto no es nuevo! —señala—. Lo que quieren es destruir todo resquicio de resistencia, toda posibilidad de

vida dentro de los campos de refugiados, destruir por completo el derecho al retorno. Y lo llevan intentando desde hace décadas”.

“Estas familias no tienen cómo resguardarse. El ejército protege a los colonos y los colonos son el ejército —explica el Dr. Barghouti—. Conozco a una mujer llamada Omar Abed que vive en el campo de refugiados de Tulkarem. Tenía cinco hijos. En los últimos cuatro meses, cuatro fueron asesinados por el ejército y uno murió de cáncer. Y como ella, miles de madres han perdido a sus hijos sin poder hacer nada por protegerlos,

sin siquiera poder enterrarlos, porque el ejército muchas veces no devuelve los cuerpos”.

Las detenciones administrativas de palestinos —es decir, sin cargos y sin derecho a un abogado— también se han disparado. El pasado martes 28 el ejército israelí irrumpió en un colegio de la UNRWA, en Nablus, y secuestró a cuatro alumnos. A la Organización de Naciones Unidas todavía no le han comunicado ni el motivo de la detención ni el destino de los menores.

Dentro de las prisiones israelíes —denuncia Naciones Unidas— la tortura se ha vuelto una práctica común que incluye vejaciones sexuales, electrocuciones, ataques con perros, golpizas y pelotones de ejecución simulada.

“Israel no tiene intención alguna de cumplir con la ley internacional —dice el Dr. Barghouti—. Querían deshacerse de los palestinos en Gaza, pero como se niegan a irse, han intensificado las masacres”.

Israel ha matado a más de 46,000 palestinos en 235 días. De ellos, 26,000 eran niños. Los crímenes de guerra son tan evidentes que el pasado viernes 24 de mayo la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel que retirase sus tropas del territorio asediado. La respuesta de Israel fue inmediata: llevó a cabo uno de los peores ataques contra la población civil desde que empezó con el genocidio.

La madrugada del lunes 27 bombardeó el patio de un refugio de la UNRWA, en Rafah. En la ofensiva murieron 50 personas, la mayoría mujeres y niños, que terminaron devorados por el incendio que desataron las bombas. Y al día siguiente, el martes 28, repitió un ataque similar también en otro campo de refugiados de Rafah. En este caso, la arremetida se saldó con 25 civiles asesinados. Y al tercer día, el miércoles 29, el asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, anunció que la “guerra” se prolongará hasta finales de año.

“Sinceramente, no podemos imaginar que esto continúe otros siete meses. Se nos han acabado las palabras para describir lo que está pasando: decir que es un infierno no es suficiente (...). Dudo que la población pueda soportar siete meses más de lo mismo. Y, desde luego, la comunidad internacional no debería permitirlo”, dice Irene Martínez, vocera de la UNRWA España. ■

Historia saqueada

► Documentos robados del Archivo General de la Nación se siguen vendiendo en escaparates virtuales de galeristas y anticuarios. El director del AGN está feliz porque la memoria del país dejará pronto el húmedo sótano que ocupaba y se mudará a un local chalaco que colinda con una fábrica de lejía

JULIO ROSPIGLIOSI

Funcionarios de "uñas largas" y galeristas codiciosos se han convertido en un combo peligroso que atenta contra el Archivo General de la Nación. La Fiscalía tiene registradas 258 denuncias por el robo y la venta de documentos históricos. Sólo el último año y medio hubo 54 denuncias. El traslado "temporal" del Archivo a un local colindante con una fábrica de lejía del Callao —advierten los expertos— mellará todavía más la conservación de nuestro patrimonio.

REMATES

Cuando el historiador Fernando Santos Granero recopilaba información para su libro sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa, advirtió que uno de los documentos cruciales para entender las motivaciones del líder indígena se estaba ofreciendo online. Lo vendía la tienda de antigüedades "HS Rare Books", de Nueva York. El precio era de 8,000 dólares.



Manuscrito fechado 1771 Español Colonial Perú Hospital de Santa Ana con 74 páginas

mostrar título original

Michael Johnson Collectibles (2671)

28.4% positivos Otros artículos del vendedor

Contactar al vendedor

US \$499.00

Aproximadamente S/. 1866.76

o Mejor oferta

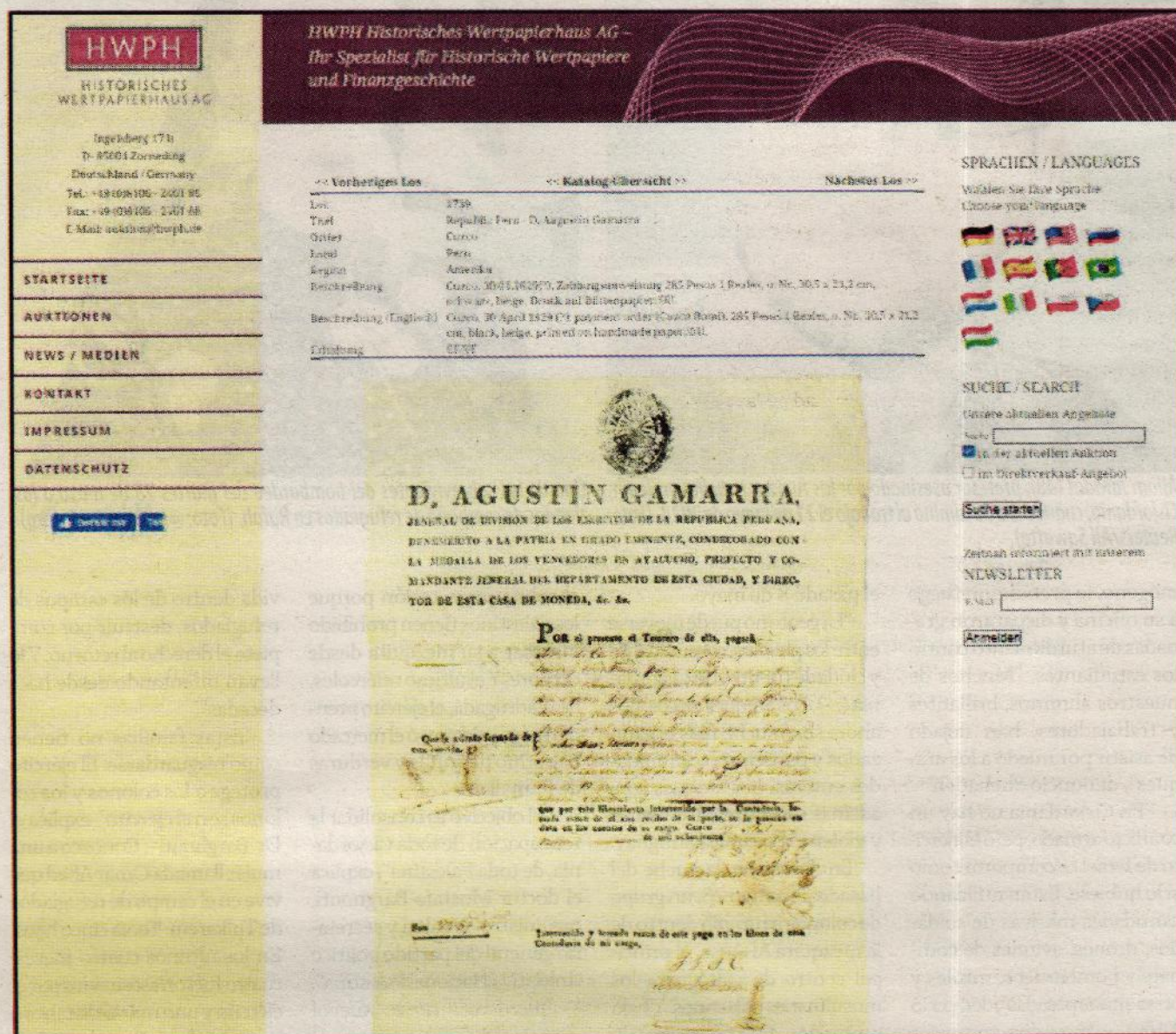
Estado: --

*aspecto súper antiguo con pliegues, pliegues, agujeros, rasgaduras, rasgaduras, manchas, decoloraciones y otros signos de "..." Más información

¡Cómpralo ahora!

Agregar al carro de compras

Manuscrito de 1771 del Hospital de Santa Ana, donde se atendía a la población indígena de la época, rematado a 499 dólares en EBay por el usuario "Michael Johnson Collectibles".



HWPB Historisches Wertpapierhaus AG - Ihr Spezialist für Historische Wertpapiere und Finanzgeschichte

Ingeborg 17b
D-85041 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)89 106 12001 85
Fax: +49 (0)89 106 12001 86
E-Mail: info@hwpb.de

STARTSEITE
AUKTIONEN
NEWS / MEDIEN
KONTAKT
IMPRESSUM
DATENSCHUTZ

Vorheriges Los
Los: 2739
Titel: República Peru - D. Agustín Gamarra
Origen: Cusco
Lote: Peru
Region: America
Beschreibung: Cusco, 30 April 1827, Zahlungsanweisung 285 Pesos 1 Real, o Nr. 30.5 x 21.2 cm, ed. w. w., beige, Druck auf Blätterpapier 501.
Beschreibung (Englisch): Cusco, 30 April 1827, payment order (Cusco Remitt), 285 Pesos 1 Real, o Nr. 30.5 x 21.2 cm, black, beige, printed on handmade paper 501.
Erfindung: GENT

Katalog Übersicht
Nachstes Los

SPRACHEN / LANGUAGES
Wählen Sie Ihre Sprache
Choose your language

SUCHEN / SEARCH
Geben Sie Ihren Angebots
Suche

Zeitschrift abonnieren mit Newsletter
NEWSLETTER
E-Mail

Anmelden

D. AGUSTIN GAMARRA,
GENERAL DE DIVISION DE LOS EJERCITOS DE LA REPUBLICA PERUANA,
DENEGRADO A LA PATRIA EN EL AÑO UNICENTE, CONSERVADO CON
LA MEDALLA DE LOS VENCEDORES EN AYACUCHO, PERFECTO Y CO-
MANDANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTA CIUDAD, Y DIREC-
TOR DE ESTA CASA DE MONEDA, &c. &c.

POR el presente el Teniente de ella, pagará
al Sr. D. Agustín Gamarra, el valor de la suma de 285 Pesos 1 Real, o Nr. 30.5 x 21.2 cm, ed. w. w., beige, Druck auf Blätterpapier 501.
Cusco, 30 April 1827, payment order (Cusco Remitt), 285 Pesos 1 Real, o Nr. 30.5 x 21.2 cm, black, beige, printed on handmade paper 501.
Erfindung: GENT

Trabajadores del Archivo General de la Nación encontraron que a fines del año pasado el sitio de subastas alemán "HWPB Historisches Wertpapierhaus AG" estaba ofreciendo un documento de 1827 firmado por Agustín Gamarra, entonces prefecto de Cusco. El precio base era de apenas 100 euros.

Sale 2546 - Lot 366

Price Realized: \$ 3,500

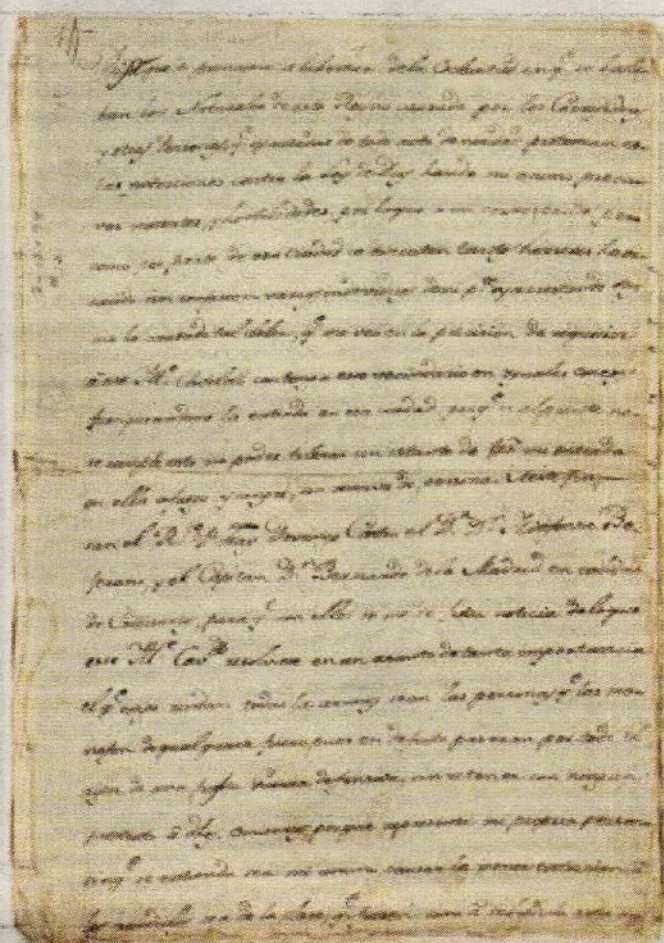
Show Hammer Price



Estimate: \$ 5,000 - \$ 7,500

(PERU.) Dossier on the rebellion and execution of Túpac Amaru II. [32] manuscript pages, 11 3/4 x 8 1/4 inches, on 8 folding sheets, loosely stitched; moderate wear. [Cuzco, Peru], November 1780 to June 1781

Set Alert for Similar Items



En la tienda neoyorquina "Swann Gallery" aún se ofrece un expediente sobre la rebelión de Túpac Amaru, con dos cartas escritas por él, valorizado entre 5,000 y 7,500 dólares.

Se trata de un manuscrito de seis páginas en el que los padres jesuitas Carlos de Pastoriza y Miguel de Eyzaguirre relatan su encuentro con el líder indígena en 1742. "Es muy frustrante. Todo el mundo sabía que este documento tenía que existir, pero nadie lo había visto. Yo sospecho que ha sido robado hace muchísimos años", dice el autor de "El espejo anticolonial", publicado en marzo pasado.

El robo de este valioso archivo recién se denunció el año 2021, cuando el Ministerio de Cultura lo vio a la venta en una página web. Las autoridades ubicaron el documento en Argentina, donde vive el gerente de la tienda, Sebastian Hidalgo Sola. Entonces, se puso en marcha un protocolo para su repatriación, pero todavía no se ha conseguido traer el manuscrito de vuelta al Perú.

"A los vendedores no les importa si pertenece al Perú. No por ignorancia. Son demasiado inteligentes y comerciales. Y en este caso han hecho su tarea: en el catálogo

explican por qué este documento es tan importante. Sabían su valor", comenta Santos Granero.

Otra galería neoyorquina que tiene documentos sustraídos ilegalmente es "Swann Gallery", liderada por la "celebridad de las subastas" Nicholas D. Lowry. En su sitio web se ofrece un manuscrito sobre la rebelión de Túpac Amaru que incluye algunas cartas de puño y letra del cacique. El archivo está valorizado entre 5,000 y 7,500 dólares.

Las casas de subastas europeas también hacen negocio "con nuestra historia". A fines del año pasado la firma belga "Booneshares", especializada en "certificados de acciones y bonos históricos", se encontraba subastando un billete emitido por la Junta del Crédito Nacional de inicios del siglo XIX. El precio base fue de 400 euros (1,626 soles).

En octubre último, los técnicos del Archivo General de la Nación también advirtieron que el portal ale-

mán "HWPB Historisches Wertpapierhaus AG" estaba subastando un documento de 1827 en el que el caudillo Agustín Gamarra, entonces prefecto de Cusco, ordenaba el pago de una deuda a favor del ciudadano Martín o Matías del Castillo. La subasta arrancaba en 100 euros (406 soles).

Hay otros documentos que terminaron en el mercado negro que no han dejado huella en internet. El 2022 se reportó el robo de un decreto emitido por Simón Bolívar el 15 de enero de 1824. El manuscrito ordenaba el ascenso de Francisco Aliaga a "capitán efectivo" de la Milicia de Caballería. Lleva la rúbrica del entonces dictador y se calcula que de estraperlo puede costar entre 2,000 y 4,000 dólares.

La Procuraduría del Ministerio de Cultura ha puesto denuncias tanto por hurto como por la comercialización de documentos. Entre los denunciados figura el peruano Jorge Bustamante Arce, que aún tiene abierta una carpeta

fiscal luego de que en 2019 la Policía incautara en su local de antigüedades cinco documentos firmados por Ricardo Palma y un manuscrito del expresidente Manuel Pardo.

Bustamante, quien no quiso dar una entrevista, sólo atinó a decir que los documentos de Ricardo Palma se los regalaron en una galería del Centro de Lima y que tenían poco valor. Dice no recordar haber tenido documento alguno de Pardo.

En el AGN alegan no saber a ciencia cierta cuándo se extrajeron los documentos que se ofrecen en tiendas virtuales. En algunos casos, los robos habrían ocurrido hace décadas y es difícil poner nombre y apellidos a los responsables. Señalan que el 2018 incrementaron las medidas de seguridad, cuando las sospechas de robos recaeron en los funcionarios.

En octubre de ese año Junior Chávez Javier, un técnico de Conservación y Preservación de Patrimonio Cultural, entró al salón donde tenían los archivos de la épo-

ca republicana con la excusa "de medir la temperatura y la humedad". Lo hizo sin supervisión y desplazando, sospechosamente, los estantes de forma tal que bloquearan la visión de la cámara de vigilancia. En ese momento sustrajo un manuscrito de Don José de San Martín en el que este concedía la libertad a una esclava.

Durante el proceso judicial, Chávez negó haber estado involucrado en el robo. Pero en febrero pasado la Corte Superior de Lima —en segunda instancia— lo condenó a cuatro años de prisión suspendida. El manuscrito nunca apareció.

El 2019 el programa "Cuarto Poder" también generó dudas sobre los trabajadores del Archivo, cuando un traficante entregó a una reportera del dominical 23 documentos que llevaban las firmas de Miguel Grau, Andrés Avelino Cáceres y Ramón Castilla. El traficante relató que había conseguido los documentos de manos de malos funcionarios. El Ministerio Público,



FOTO JOEL DURÁN

Hoy los archivos se encuentran en el sótano del Palacio de Justicia en condiciones deplorables. La nueva sede del AGN no tiene cuándo empezar a construirse.



FOTO JOEL DURÁN

El almacén del consorcio Transel, en la urbanización Industrial Bocanegra (Callao), colinda con la fábrica de Clorox. 12,3 millones de soles nos costará alquilarlo por tres años. El plazo se podría ampliar.

sin embargo, archivó el caso en febrero del 2022.

MÁS CAOS

La próxima mudanza del Archivo al Callao ha encendi-

do las alarmas. El lugar escogido está al lado de la fábrica de lejías Clorox, en la urbanización Industrial Bocanegra. Es un lugar de difícil acceso al público y en una provincia con alta incidencia delictiva.

El inmueble le pertenece al Consorcio Transel, que el pasado 2 de mayo se hizo de un contrato directo de 12,3 millones de soles por tres años de alquiler. Tiene el visto bueno del jefe del AGN, Ricardo

Moreau Heredia, y los principales directivos de la entidad.

Ya el Poder Judicial ha puesto como plazo agosto de este año para que desalojen el sótano del Palacio de Justicia que el AGN ocupa hasta hoy. La

mudanza es, en teoría, temporal, hasta que la construcción de la nueva sede del AGN en Pueblo Libre esté lista. Pero nadie sabe cuándo será eso.

"El expediente técnico está en arbitraje hace dos meses,



"No va a haber mudanza hasta que esta comisión de expertos extranjeros haga una evaluación de las condiciones y la implementación que se pueda hacer en ese local", dice Ricardo Moreau Hereñía. El contrato de alquiler, sin embargo, ya se firmó.

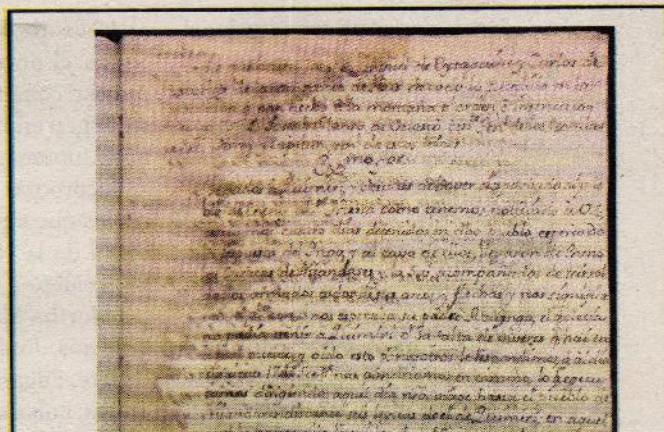


"No les importa si pertenece al Perú. Y no creo que sea ignorancia. Sabían su valor", dice Fernando Santos Granero, autor de un reciente libro sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa. El historiador encontró que un documento clave para su investigación se vendía en internet a 8,000 dólares.

FOTO JOEL DURÁN

pero se ha saneado el tema registral", dice Ricardo Moreau. El funcionario calcula que la obra puede demorar, "en el mejor escenario", cuatro años.

El último fin de semana, el



7- Journey overland in colonial Peru by a Chilean Jesuit

[Eysaguirre, Miguel de; Pastoriza, Carlos de]. Informe que hacen los PP. Miguel de Eysaguirre y Carlos de Pastoriza de la Compañía de Jesús de todo lo sucedido en la expedición que han hecho a la montaña por orden e intrucción del Exmo Sr. D. Joseph Manso de Velasco teniendo general de los exercitos del S.M. Virrey y Capitan gneral de estos Reinos. 1795. Lima. In folio (304 mm x 208 mm). 6 ff. Manuscript in brown ink; overall very good, water staining into text.

Important manuscript copy in perfectly legible calligraphy, with the itinerary of Eysaguirre and Pastoriza in Peru; it contains vast news of the expeditions carried out by the Jesuits in the mountains of several Peruvian towns as Quimiri, La Sal, Metraro, Eneno, and others. The relation begins by informing the dispatching of Father Yrusta to Eneno and of being detained at Quimiri for four days, awaiting the response of the Inca ("estuvimos cuatro dias detenidos en dho pueblo esperando la respuesta del Ynga, al cavo de ellos, llegaron de Eneno los Curacas de Nijandares, y la Sal, acompañados de seis soldados, armados todos de sus arcos, y flechas"), after which soldiers armed with arrows and bows arrived and mentioned their father expected them. The relation continues in full detail, with the audiences with the tribal leaders, welcoming's, farewells, and other details with the outstanding details observed during their journey overland.

Catálogo que describe la importancia del manuscrito de dos jesuitas que narraban su encuentro con el rebelde indígena Juan Santos Atahualpa en 1742. Era vendido por la tienda de antigüedades "HS Rare Books", de Nueva York, a 8,000 dólares.



La "celebridad de las subastas" Nicholas D. Lowry. En su tienda "Swann Gallery", de Nueva York, aún se ofrece un expediente sobre la rebelión de Túpac Amaru valorizado entre 5,000 y 7,500 dólares. Incluye dos cartas de puño y letra del cacique.

portal "Epicentro" reveló un informe interno del Ministerio de Cultura elaborado por el ingeniero Fernando Aguilar Grados, que concluye que el local escogido para la mudanza "se encuentra dentro de una urbanización industrial con los riesgos de seguridad industrial que acarrea frente a eventos adversos como son: incendios, contaminación

química, inundaciones y hurto". Historiadores, archiveros y exfuncionarios del AGN se oponen a la mudanza.

Al mandamás del AGN no le entran balas. Moreau señala que la fábrica de Clorox con la que colinda cumple con todos los requisitos de seguridad para minimizar los riesgos de cualquier siniestro. Asegura que el in-



En el 2022 se reportó el robo de este decreto de 1824 emitido por Simón Bolívar en el que ordenaba el ascenso de Francisco Aliaga a "capitán efectivo" de la Milicia de Caballería. No hay rastro del archivo.



Jorge Bustamante Arce, coleccionista peruano, aún afronta una investigación porque en su tienda de antigüedades se hallaron cinco documentos firmados por Ricardo Palma y un manuscrito de Manuel Pardo.

ventario de las cajas de documentos está a un 90% y que los mismos funcionarios del AGN sellarán estas cajas con un precinto para que luego sean trasladadas al Callao en camiones "con cámaras de videovigilancia dentro". Afirma incluso que los vehículos serán escoltados por el Ejército.

Moreau dice, sin embargo, que no se mudarán hasta que

una "comisión internacional" designada por el Consejo Internacional de Archivos certifique que las condiciones del nuevo local no son un riesgo para el patrimonio cultural. Al cierre de esta edición, no aclaró por qué esta "comisión" no fue convocada antes de firmar el millonario contrato con Transel, la gran ganadora de esta historia. ■

Tanta falta de respeto a los organismos internacionales ha carcomido de tal modo la imagen de Israel que este viene transformándose en un Estado paria. Israel se hizo para que el holocausto nazi no se repitiera pero la paradoja es que algunos de los que hoy lo defienden son los que descienden de las fuerzas ultraderechistas que en la II Guerra Mundial lucharon con Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco.

El aislamiento de Israel viene afectando profundamente al turismo, la economía y la imagen internacional de dicho Estado. A nivel interno, la población viene pidiendo la salida de Netanyahu. Yair Lapid, líder de la oposición, lo acusa de obstaculizar el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos solo para continuar esta guerra, impidiendo ser echado del poder.

Netanyahu sabe que si pierde, el gobierno puede tener el mismo futuro de la presidenta boliviana Jeanine Áñez, el que también se cierne sobre Dina Boluarte.

Israel ha encarcelado a Moshe Katsav (presidente israelí 2000-2007), sentenciado a 7 años por violación y obstrucción a la justicia, a Ehud Olmert (primer ministro en 2006-2009), sentenciado por corrupción, a

dos rabinos supremos y a una treintena de antiguos ministros o congresistas.

Netanyahu ha buscado mantenerse en el poder y recortar la autonomía judicial para evitar ser procesado por los llamados casos "100" (haber recibido prebendas personales tanto para él como para su esposa a cambio de favores a empresarios), "200" (para beneficiar a un periódico aliado suyo) y "400" (por corrupción y soborno).

Puede que Israel nunca quiera entregar a Netanyahu a la CPI, pero es tal la presión internacional y nacional contra él que su gobierno no durará mucho. Mientras más quiere mantenerse en el poder, más masacres alienta y más cava su tumba. Si bien es posible que no termine en La Haya, es muy probable que sea condenado en Israel mismo. Al fin y al cabo, el mayor gánster de todos los tiempos, Al Capone, terminó preso solamente por evadir impuestos.

Un israelí fue quien abatió a Isaac Pérez, el primer ministro que firmó acuerdos de paz. Por ello no se puede descartar la posibilidad de que Netanyahu, su contraparte, sea asesinado, ya sea por palestinos o por algún israelí que haya visto morir seres queridos suyos en este conflicto. ■

Fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena: el objetivo es destituirlo del cargo e inhabilitarlo por 10 años en el ejercicio de la función pública.

VIENE DE LA PÁGINA 3

tar la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, según parlamentarios consultados para este reportaje.

"Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba un informe favorable (contra Villena), lo remitirá a la Comisión Permanente. Esta puede aprobar ese informe y acusar al Fiscal de la Nación ante el pleno por infracción a la Constitución", advirtió a este semanario el abogado constitucionalista Omar Cairo. "Para destituir al Fiscal de la Nación el pleno requiere de los votos de dos tercios del número legal de congresistas. Es decir, 87 votos", manifestó Cairo.

artículos de la Carta Magna. Según el documento, la denuncia constitucional tiene su origen en la decisión de la fiscal suprema Delia Espinoza de incorporar a las investigaciones que sigue contra la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a los congresistas Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Ilich López, César Revilla, Jorge Flores Ancachi y Alejandro Soto. Este último es nada menos que el presidente del Congreso.

De tal manera que al sacar del camino al Fiscal de la Nación interino no solo se

coordinadora del Eficcop, tuvieron que abandonar las instalaciones que ocupaban en la sede central del Ministerio Público, situado en la avenida Abancay, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Ministerio del Interior.

El martes 28 Dina Boluarte se presentó en la Fiscalía de la Nación para ser interrogada precisamente sobre la desarticulación de la unidad policial que allanó su domicilio durante la Semana Santa.

El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, señaló que su defendida respondió 50 preguntas. La diligencia demoró casi tres horas, luego de lo cual Boluarte se retiró sin declarar a la prensa.



¿Pueden obtener esa votación fácilmente? La respuesta es sí. Numerosas bancadas buscan deshacerse de Villena para frenar las investigaciones que la Fiscalía de la Nación ha abierto contra un grupo de congresistas. Y esta es una oportunidad para cobrar venganza.

En marzo de este año los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón y Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú) e Ilich López (no agrupado) presentaron una denuncia constitucional contra Villena.

La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acciones Constitucionales del Congreso de la República por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Los legisladores también solicitan la inhabilitación de la función pública de Villena hasta por 10 años, por presuntamente haber infringido siete

beneficiaría a Dina Boluarte sino también a aquellos parlamentarios comprometidos en sendas investigaciones del Ministerio Público. Se trata, en los hechos, de una suerte de pacto delictivo para destruir las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Nación.

Hasta el momento, la Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte por dos presuntos delitos: homicidio calificado y cohecho pasivo impropio (soborno). Sin embargo, fuentes del Ministerio Público señalan que Villena también prepara una tercera denuncia constitucional contra la mandataria, esta vez por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, a raíz de la desactivación del Equipo Especial de la Policía que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra el Poder (Efficop).

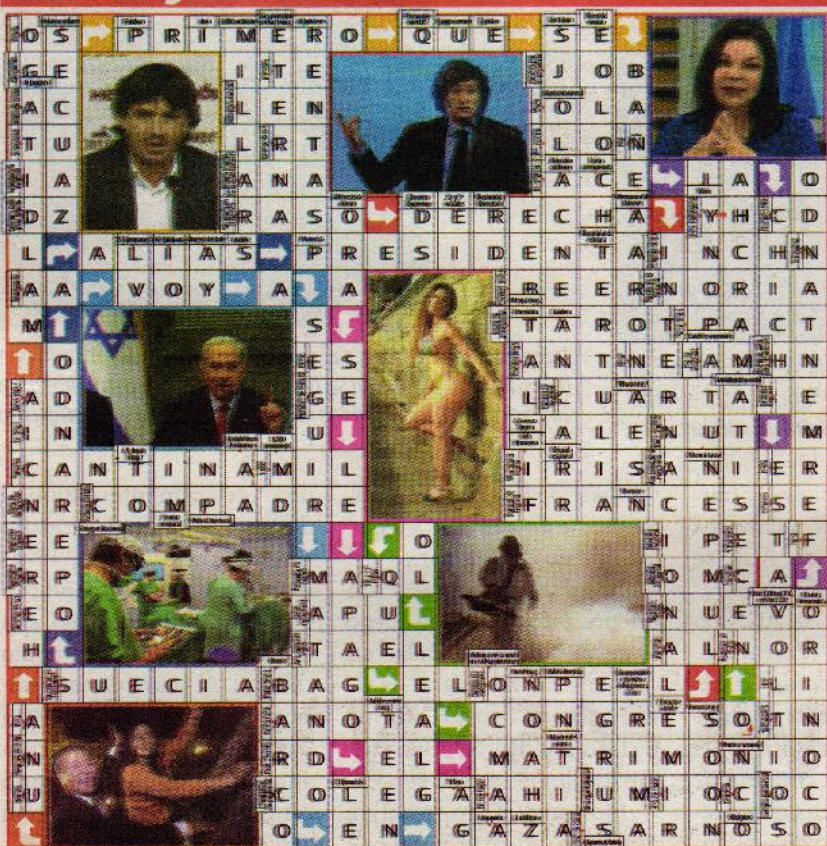
El miércoles último, de hecho, los policías del Equipo Especial que trabajaban con la fiscal Marita Barreto Rivera,

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público dijeron a este semanario que la presidenta no absovió las dudas de los cuatro fiscales que la interrogaron. De hecho, según esta versión, la presidenta ofreció declaraciones contradictorias que agravaron su situación procesal.

En esta investigación, la Fiscalía de la Nación cuenta con declaraciones y grabaciones que indican que Boluarte **utilizó** todo su poder para intentar comprar, a través de su exabogado Mateo Castañeda, a los coroneles de la Policía que la investigaban, Harvey Colchado y Walter Lozano. Y, al no lograrlo, dispuso que el Ministerio del Interior desactivara al equipo policial que apoyaba al Eficcop.

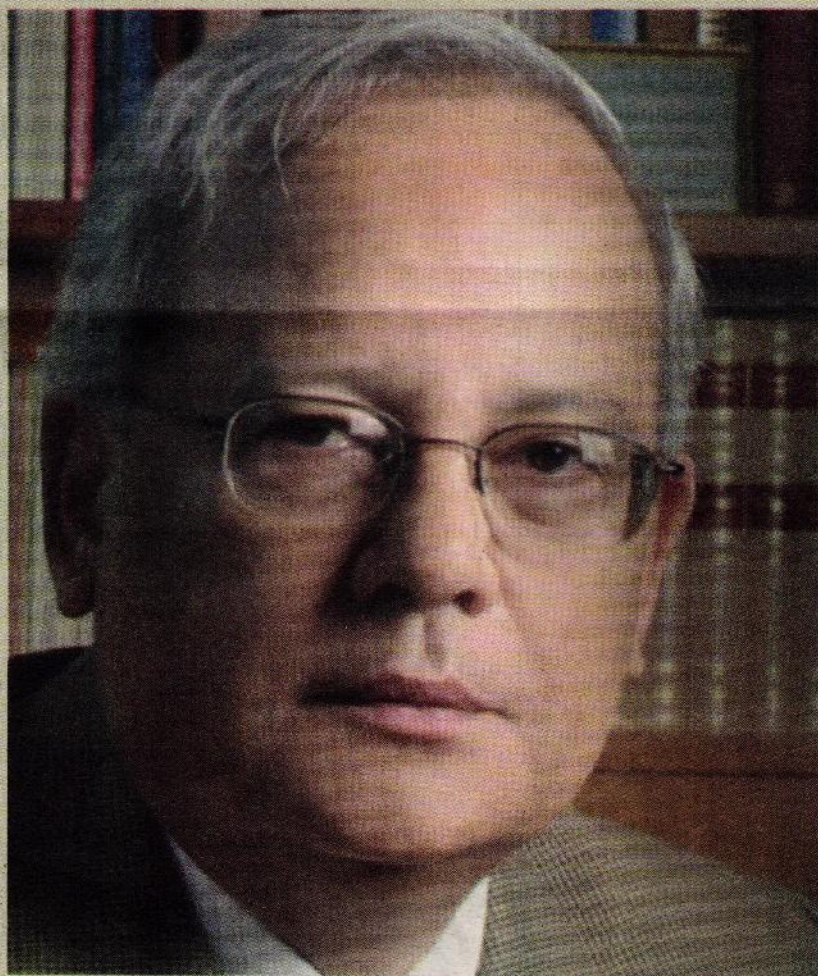
Con una tercera denuncia constitucional por encubrimiento, Dina Boluarte sería la presidenta de la República con el mayor prontuario delictivo desde Alberto Fujimori. Todo un récord para la mandataria más impopular de la historia del país. 

Pendograma solución anterior N°687



Todos los lunes podrás seguir la
transmisión en vivo del
Podcast de César Hildebrandt

Sólo tienes que ingresar a
www.hildebrandtensustrece.com y
darle **PLAY** al enlace que aparecerá
minutos antes de las 9:00 pm.



Nuestro canal de
YouTube llegó
esta semana
a los 119,431
suscriptores y ha
sumado
9'777,991 vistas
en poco más de
un año

HILDEBRANDT
en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

